No. 64

NOVIEMBRE DE 2017

Documentos **CEDE**

ISSN 1657-7191 Edición electrónica.

Edición especial **CESED**

Mismo recurso, diferentes conflictos:
Un análisis de la relación entre oro,
conflicto y criminalidad en seis
departamentos colombianos

Angelika Rettberg
Juan Camilo Cárdenas
Juan Felipe Ortiz-Riomalo

CESED
Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas

CEDE
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO

Universidad de los Andes
Facultad de Economía

Serie Documentos Cede, 2017-64
ISSN 1657-7191 Edición electrónica.
Noviembre de 2017

© 2017, Universidad de los Andes, Facultad de Economía,
CEDE. Calle 19A No. 1 – 37 Este, Bloque W.
Bogotá, D. C., Colombia Teléfonos: 3394949- 3394999,
extensiones 2400, 2049, 3233
infocede@uniandes.edu.co
<http://economia.uniandes.edu.co>

Impreso en Colombia – Printed in Colombia

La serie de Documentos de Trabajo CEDE se circula con propósitos de discusión y divulgación. Los artículos no han sido evaluados por pares ni sujetos a ningún tipo de evaluación formal por parte del equipo de trabajo del CEDE.

El contenido de la presente publicación se encuentra protegido por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad intelectual, por tanto su utilización, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso, digital o en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y sólo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito del autor o titular. Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor, sólo serán aplicables en la medida en que se den dentro de los denominados Usos Honrados (Fair use), estén previa y expresamente establecidas, no causen un grave e injustificado perjuicio a los intereses legítimos del autor o titular, y no atenten contra la normal explotación de la obra.

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Mismo recurso, diferentes conflictos: Un análisis de la relación entre oro, conflicto y criminalidad en seis departamentos colombianos

Angelika Rettberg¹ Juan Camilo Cárdenas² Juan Felipe Ortiz-Riomalo³

Este documento corresponde a un capítulo del libro “¿Diferentes recursos, conflictos diferentes? La economía política regional del conflicto armado y la criminalidad en Colombia”, co-editado por Angelika Rettberg, Ralf Leiteritz, Carlo Nasi y Juan Diego Prieto (Bogotá D.C. : Ediciones Uniandes, 2018).

Resumen: La adopción de una nueva política minera en 2001 junto con el drástico incremento de los precios internacionales de oro desde ese mismo año ha motivado la expansión de la minería aurífera (formal e informal) en Colombia. Desde entonces, tanto en regiones mineras tradicionales como nuevas regiones auríferas, diversidad de actores estatales y no estatales (operadores mineros de distintas escalas, nacionalidades y grados de formalidad, comunidades y autoridades locales y regionales, organizaciones ambientales, representantes del sector agrícola) han estado envueltos en tensiones y conflictos en torno al manejo del recurso aurífero (cómo extraerlo, captar sus rentas y evitar y manejar sus externalidades). Además, actores armados no estatales han encontrado en la minería de oro una fuente rentable de ingresos para complementar o incluso sustituir fuentes tradicionales de ingresos (secuestro y producción y tráfico de narcóticos). Bajo este panorama nacional en el que la minería de oro se entrelaza con el conflicto (violento y no violento), una mirada al nivel sub-nacional expone dinámicas particulares en las cuales la producción de oro se puede encontrar tanto aislada como vinculada al conflicto a través de diferentes canales o mecanismos. Es pues el propósito de este capítulo estudiar esas dinámicas sub-nacionales. Para ello se comparan las trayectorias de seis regiones auríferas en Colombia teniendo en cuenta tanto las características particulares del proceso de producción y comercialización como las características del contexto institucional (reglas en uso), político (dinámicas sub-nacionales del conflicto armado), sociocultural (características de los actores involucrados) y biofísico (las características físicas del recurso minero). Esta comparación permite identificar un conjunto de posibles factores que configuran patrones sub-nacionales de la relación entre minería de oro y conflicto. A partir de este análisis, el capítulo ofrece pistas para orientar el diseño e implementación de políticas y estrategias orientadas tanto desvincular el oro del conflicto, así como a integrarlo en arreglos institucionales que promuevan decisiones responsables y cooperativas en su manejo.

Códigos JEL: Q32, Q34

Palabras clave: Minería, Oro, Conflicto, Regiones

¹ rettberg@uniandes.edu.co Profesora asociada del Departamento de Ciencia Política y directora de la Maestría en Construcción de Paz, Universidad de los Andes

² jccarden@uniandes.edu.co Decano y profesor titular, Facultad de Economía, Universidad de los Andes

³ juanfelipe.ortizriomalo@uni-osnabrueck.de Estudiante de doctorado, Instituto de Investigaciones sobre Sistemas Ambientales (IUSF) y Facultad de Administración de Negocios y Economía, Universidad de Osnabrueck (Alemania). Investigación y posición doctoral financiada por la Fundación Alexander von Humboldt (*Alexander-von-Humboldt Professorship for Environmental Economics*) y el Ministerio para la Ciencia y la Cultura del Estado de Baja Sajonia (Alemania).

Same Resource, different conflicts: An analysis of the relationship between gold, conflict and criminality in six Colombian regions

Angelika Rettberg⁴ Juan Camilo Cárdenas⁵ Juan Felipe Ortiz-Riomalo⁶

This document is a chapter of the book “¿Diferentes recursos, conflictos diferentes? La economía política regional del conflicto armado y la criminalidad en Colombia”, edited by Angelika Rettberg, Ralf Leiteritz, Carlo Nasi y Juan Diego Prieto (Bogotá D.C.: Ediciones Uniandes, 2018).

Abstract: Since 2001, a new enacted national mining legislation and skyrocketing international gold prices have triggered the expansion of formal and informal gold mining in Colombia. Since then, in both traditional and new gold mining regions, mining operators of various scales, nationalities and levels of formality; local and regional communities; local and regional authorities; environmental organizations; and representatives of the farming sectors, have been entangled in tensions revolving on the way to extract gold, capture its rents, and avoid and manage its impacts on the environment and other economic activities. Furthermore, non-state armed actors have found in gold mining a profitable source of income to either complement or substitute their traditional sources of funding, i.e. kidnapping and, primarily, drugs production and trafficking. Under this general national trend where gold mining intertwines with (armed and socio-environmental) conflict, a closer look at the subnational level exposes various dynamics wherein the activity is kept from or interact with several types of conflicts. It is this the purpose of this chapter to study these dynamics and their underpinning mechanisms by comparing the historical trajectories of six of the largest gold mining regions in Colombia. The chapter takes into account the features of the production and commercialization processes, as well as the institutional (i.e. working rules), political (i.e. sub-national dynamics of the armed conflict), sociocultural (i.e. attributes of the concerned actors), and biophysical context (i.e. type of deposit exploited), to identify the possible set of factors configuring different patterns of interaction between gold mining and conflict. Upon this analysis, the chapter draws insights to guide and enhance the design and implementation of policies and strategies aimed at both disentangling gold mining from conflict, as well as at embedding it in responsible decisions and cooperative patterns of interactions.

JEL Codes: Q32, Q34

Keywords: Mining, Gold, Conflict, Regions

⁴ rettberg@uniandes.edu.co Professor, Political Science Department, Universidad de los Andes (Bogotá – Colombia) where she leads the Research Program on Armed Conflict and Peacebuilding and the M.A. Program on Peacebuilding.

⁵ jccarden@uniandes.edu.co Dean and professor, Economics Department, Universidad de los Andes (Bogotá – Colombia)

⁶ juanfelipe.ortizriomalo@uni-osnabrueck.de PhD Student, Institute for Environmental Systems Research (ISUF) and School of Business Administration and Economics, Osnabrueck University (Osnabrueck - Germany). Funded by the Alexander-von-Humboldt Professorship for Environmental Economics and the Ministry for Science and Culture of Lower Saxony (Germany).

Agradecimientos

La elaboración de este capítulo fue posible gracias al apoyo y colaboración de múltiples personas y organizaciones a quienes queremos agradecer. La investigación que nutre la mayor parte del capítulo fue financiada por la Vicerrectoría de Investigaciones, la Vicedecanatura de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes. Rettberg y Ortiz-Riomalo agradecen a Ervyn Norza, Mauricio Romero, y demás integrantes del equipo de investigación del Observatorio del Delito (Policía Nacional), por el trabajo conjunto realizado en el marco de la investigación “Incertidumbre, vacíos y variación: Un diagnóstico de la actividad minera de oro en diez departamentos de Colombia”; parte de la información en ella recolectada se emplea en este capítulo. A Miguel García y Juan Diego Prieto agradecemos por compartirnos los datos a su disposición sobre conflicto y violencia en Colombia. A Mauricio García, Laura Hamón, Pedro Hernández, Mariana Maldonado, Yaddi Miranda, Sebastián Pantoja y Catalina Rodríguez agradecemos por su trabajo como asistentes de investigación. No sin antes asumir la responsabilidad por los errores e imprecisiones remanentes, a dos evaluadores anónimos y a Juan Diego Prieto agradecemos sus valiosos comentarios a versiones previas del capítulo. Por último, y en absoluto por ello menos importante, agradecemos a todos los actores entrevistados o visitados en campo por su tiempo, hospitalidad y excelente disposición para ayudarnos a entender y comprender la complejidad del sector minero colombiano. Hubiera sido otra su actitud, difícilmente habiéramos podido contar con la información que alimenta el capítulo y soporta el desarrollo de nuestros argumentos.

Introducción

Los capítulos que componen este libro están basados en la premisa fundamental de que, para comprender las dinámicas del conflicto armado y de la criminalidad colombiana, es preciso adoptar una perspectiva regional, con base en los recursos que dominan las economías subnacionales. En breve, los distintos autores compilados argumentamos que las características del proceso de producción y comercialización del recurso que marca una determinada economía regional inciden en las decisiones de los actores armados o criminales de ocupar o competir por ese territorio así como en las estrategias empleadas para controlarlo y en la intensidad y las formas de la violencia resultante. Ese énfasis en el orden subnacional es importante porque muestra de qué forma los conflictos armados, aunque sus protagonistas tengan agendas y aspiraciones de alcance nacional, tienen manifestaciones regionalmente distintas. Este es un aporte relevante a la literatura global sobre la economía política de los conflictos armados, que tiende a privilegiar el nivel nacional en los análisis de los vínculos entre recursos y guerras. El recurso presentado en este capítulo, el oro, nos obliga a explorar un nivel adicional de diferenciación, referido a la variación dentro de un mismo recurso en cuanto a su relación con el conflicto armado y la criminalidad en distintas regiones.

El contexto nacional del mercado del oro se inscribe en la evolución reciente de la minería colombiana, declarada locomotora del crecimiento por parte del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014, 2014-2018). Durante los últimos años, la minería ha estado marcada por un elevado flujo de inversión extranjera, por la competencia por títulos mineros necesarios para la exploración y la explotación, así como por grandes expectativas de ganancia de las grandes empresas dedicadas al negocio y del Estado colombiano en cuanto a la generación de regalías, debido a los recientes precios elevados de este mineral. Las expectativas de ganancias también han contagiado a las organizaciones armadas e ilegales: el oro se ha constituido en recurso financiador de estructuras armadas antes dedicadas primordialmente a los cultivos ilícitos (Massé & Camargo, 2013; Massé, 2016; Rettberg & Ortiz-Riomalo 2016).

A pesar de una leve caída reciente en el precio del oro, éste sigue ubicado por encima de su promedio histórico—ver figura 2, abajo—, y por tanto también, adicionalmente a los empresarios formales, hay quienes ejercen esta actividad extractiva en condiciones de informalidad e ilegalidad debido a las altas rentas derivadas de los altos precios.

En las regiones mineras, sin embargo, la realidad de la producción y la comercialización aurífera encierra diversas posibilidades en cuanto a su relación con la economía (in)formal, el (des)orden social, la (in)estabilidad política, la violencia y la criminalidad. Así lo demuestran los casos de los municipios, en seis departamentos, descritos en este texto: Cauca, Tarazá y Zaragoza en Antioquia, en la subregión del Bajo Cauca; Marmato en Caldas; Quibdó y Tadó en Chocó; La Llanada y Los Andes en Nariño; California, en Santander; y Cajamarca en Tolima. Estas regiones han sido protagonistas de la producción de oro en Colombia por razones y sendas históricas diferentes en muchos casos. Entre ellas, el Bajo Cauca antioqueño constituye el caso prototípico de la relación entre recurso y violencia,

pues los elevados niveles de violencia dan fe de la competencia por el territorio y el recurso por parte de diferentes tipos de organizaciones armadas. En contraste, en los municipios del distrito minero de La Llanada, en Nariño, el oro se extrae y comercializa en al menos parcial aislamiento de la presencia de actores armados al margen de la Ley (AAML). En Quibdó y Tadó, en Chocó, departamento cuya tradición minera se remonta a la época de la Colonia, convergen, por su parte, distintos modos en los que la minería de oro puede relacionarse con el conflicto y la criminalidad: el conflicto entre distintos tipos de operaciones mineras (minería informal, no legal en su mayoría, mecanizada, frente a minería artesanal, ejercida con mucho menor grado de mecanización) y entre la minería no legal y otros tipos de actividades económicas como la pesca; la presencia de actores armados que buscan captar ilegalmente los ingresos y las rentas generadas por la actividad (principalmente de la operaciones a mediana escala, con un grado mayor de mecanización); y la presencia de esquemas de certificación que buscan incrementar la formalidad y responsabilidad a lo largo de la cadena de valor, facilitando aislarla de los actores armados ilegales.

En California, también un municipio de tradición minera, ubicado en el área de influencia del páramo de Santurbán y con una tradición aurífera de varios siglos, la minería de oro estuvo expuesta a la influencia de los actores armados ubicados en la región durante la década de los noventa. Entonces víctimas de extorsión y secuestros extorsivos, los operadores mineros en la región han logrado desde 2002, una vez recuperado el control del territorio por parte de la Fuerza Pública, ejercer la actividad al margen de la influencia de actores armados ilegalmente. No obstante, tensiones entre distintos tipos de operaciones mineras (principalmente operadores a gran escala que llevan a cabo actividades de exploración aurífera y operadores mineros tradicionales), y entre organizaciones de la sociedad civil defensoras del ambiente y operadores mineros, han provocado que la actividad se lleve al margen del conflicto violento, sí, pero permeada por el conflicto social y ambiental. Este es un caso ilustrativo de los retos que enfrenta el país, de cara al posconflicto, en el manejo de los recursos naturales y la protección ambiental. La gran mina de Cajamarca, Tolima, municipio de tradición agrícola, hasta el primer semestre de 2017 estaba siendo explorada por una empresa multinacional, la Anglo Gold Ashanti. Aunque no ha logrado estar completamente aislada de la influencia de los AAML presentes en la zona, el conflicto social y ambiental, más que el conflicto violento o la relación con la criminalidad, es el que predomina en este caso en el que confluyen diversidad de intereses: empresariales y campesinos, vinculados a la producción agrícola, ambientales, vinculados a la defensa del agua, principalmente, y políticos, vinculados a las autoridades locales de los municipios de influencia del proyecto que, con el ánimo de dar trámite a las demandas de estos actores, y de buena parte de los habitantes del territorio de influencia de la mina, han propuesto y avanzado consultas populares sobre el ejercicio de la actividad extractiva en los municipios de sus jurisdicciones. Finalmente, en Marmato, Caldas, el conflicto, aislado de la presencia de actores armados, se centra en las tensiones existentes entre operadores mineros

tradicionales, informales, y operadores de mayor escala, formales, en torno al modo de organizar la extracción del recurso en un municipio históricamente aurífero.

En resumen, las regiones aquí discutidas representan el modo heterogéneo como se configura la relación entre minería de oro, conflicto y criminalidad en el nivel sub-nacional dentro de un contexto nacional e internacional que comparte ciertos rasgos similares, más homogéneos.

A través de 78 entrevistas semi-estructuradas a diversos actores del sector a nivel nacional y en estos municipios, y recolección de fuentes secundarias en las regiones y a nivel nacional, logramos recoger información de la diversidad y heterogeneidad entre estas regiones mineras. El análisis que ofrecemos en este capítulo pretende resaltar los contrastes entre el nivel nacional y las realidades subnacionales de un mismo recurso y sus vínculos con el conflicto y el crimen, para mostrar la importancia de considerar las características organizativas, laborales, geológicas y culturales del proceso de producción y extracción en conjunto con aquellas del contexto social, político y económico, y así identificar cuáles o qué combinaciones de factores elevan(o no) la propensión del recurso a ser integrado en las dinámicas de guerra. En contra de la estigmatización de los recursos como “recursos de conflicto” *per se*, este argumento pretende llamar la atención a las condiciones que facilitan, pero también aquellas que previenen, los vínculos entre recursos, conflicto y criminalidad (ver capítulo introductorio). Las regiones estudiadas, entonces, presentan arreglos institucionales y sociales variables que se reflejan en su relación con el conflicto y la criminalidad.

En las dos siguientes secciones haremos, primero, una descripción general de las transformaciones recientes de la minería colombiana así como de la relación entre minería de oro, conflicto armado y criminalidad en el país. Seguidamente presentaremos descripciones de las regiones auríferas seleccionadas y su relación con la criminalidad y el conflicto (violento y no violento) en torno al aprovechamiento del oro, prestando atención a las particularidades del recurso y de su extracción (como el tipo de depósitos disponibles en la zona—de veta o de aluvión—; también evaluaremos la formalidad o institucionalización del proceso extractivo, la presencia y nacionalidad de empresas extractivas), el tipo de comunidades dedicadas a la minería (si cuentan con rasgos culturales específicos y la historia y duración de su vínculo con el mineral) y la ubicación de las regiones en relación con corredores u otras regiones estratégicas dentro del accionar de los diferentes actores ilegales y criminales así como en relación con cultivos ilícitos. Las descripciones regionales son analizadas en la siguiente sección, de acuerdo con el marco analítico desarrollado en este libro. El capítulo concluye con un resumen de los principales hallazgos y una serie de recomendaciones de política.

Minería en Colombia

Cuatro hechos caracterizan el contexto y el desarrollo reciente de la minería de oro en Colombia durante el final del siglo XX y los primeros años del siglo XXI: (1) la adopción de

un nuevo marco institucional para regular el proceso minero⁷, (2) el auge en la exploración y explotación de yacimientos auríferos, (3) la dificultad para asegurar la aplicación del marco institucional vigente en las distintas unidades de producción minera de oro (UPMO) y en las diferentes etapas de la actividad minera, y (4) la intensificación y diversificación de la relación entre la actividad, el conflicto—violento y no violento—y la criminalidad.

Durante el final del siglo XX y los primeros años del siglo XXI las reglas construidas en el nivel nacional para gobernar o enmarcar los procesos y actividades relacionadas con el aprovechamiento de los recursos mineros facilitaron y promovieron la entrada y participación de múltiples actores, estatales y no estatales. Especialmente, las políticas mineras, de seguridad y tributaria se encaminaron a incentivar la participación del sector privado en la exploración y explotación de recursos mineros como el oro. Por su parte, las regulaciones de los procesos de comercialización de oro, así como de declaración, pago, distribución e inversión de regalías ampliaron el conjunto de actores que podrían y deberían participar en ellos. De manera coincidente, las condiciones de los mercados internacionales de bienes básicos, en general, y del oro, en particular, incentivaron también la entrada de nuevos actores interesados en invertir en el sector, explotar el recurso o en captar y aprovechar sus crecientes ingresos y rentas generadas.

Como resultado, la actividad minera se intensificó y la minería de oro incrementó su importancia en las economías regionales y la economía nacional. Lo anterior se evidencia en la mayor disponibilidad de recursos para financiar actividades de exploración minera, en una mayor producción, en más regalías e impuestos generados por el sector minero, y en un número más grande de operadores vinculados a la actividad. En un contexto de baja capacidad para implementar el marco institucional vigente por parte de los actores estatales correspondientes, la mayoría de UPMO ha operado al margen de la legalidad y la regulación sobre la cadena de valor ha sido laxa e inefectiva. Por lo demás, el proceso de entrega de títulos mineros no ha permitido la selección del proponente más idóneo y, al no tener en cuenta adecuadamente las características de los territorios en que se otorgan, se han generado tensiones en torno al modo de extraer el oro, al uso del suelo y a la conservación de ecosistemas estratégicos y parques naturales.

Es en este contexto en que de manera diferenciada, como se verá, en las regiones auríferas y de potencial minero se intensifica el conflicto violento (Ibáñez y Laverde, 2014; Idrobo et al., 2013; Velásquez et al., 2013), los AAML amplían y diversifican su participación en los diferentes eslabones de la cadena de valor de la minería aurífera (Massé & Camargo, 2013; Rettberg & Ortiz-Riomalo, 2014a y 2014b), se deterioran las condiciones de seguridad y convivencia en las regiones auríferas (Rettberg et al., 2013) y surgen conflictos socio-ambientales (CINEP/PP 2012; Pérez-Rincón, 2014). El entorno económico e institucional en el que se ha tejido la relación entre minería de oro, conflicto y criminalidad explica en parte este cambio en la intensificación de los conflictos asociados a la minería de oro

⁷ No se tiene en cuenta aquí el conjunto de reformas adoptadas desde el inicio del primer gobierno del Presidente Juan Manuel Santos Calderón con el ánimo de fortalecer institucionalmente el sector—mejorar las disposiciones y capacidades para incrementar la legalidad y eficiencia en el aprovechamiento del recurso minero. Estas son tenidas en cuenta, y brevemente discutidas, en las últimas dos secciones del capítulo.

Contexto institucional

En el periodo 1990 – 2005 se adoptaron medidas que simplificaron, liberalizaron y hasta cierto punto redujeron las regulaciones del marco institucional que gobierna el proceso minero en sus diferentes etapas: exploración, explotación y beneficio, y comercialización.

En relación con la *comercialización de oro* las Leyes 9 de 1991 y 31 de 1992 acabaron con el monopsonio del Banco de la República en el mercado del oro—el cual tuvo hasta esa fecha la potestad de concentrar las tenencias del metal (Uribe Escobar, 2014). Desde entonces, el oro producido es exportado bien sea directamente por las empresas mineras más grandes o por comercializadoras internacionales, ubicadas principalmente en Cali y Medellín, que adquieren el metal a través de agencias ubicadas en zonas mineras o comerciantes intermediarios (Uribe Escobar, 2014, p. 7). También participan en la comercialización del metal oficinas de compra y venta de oro ubicadas en zonas mineras e intermediarios particulares, no todos constituidos formalmente, que adquieren y venden el oro por canales alternos.

Por su parte, el proceso asociado de *declaración, liquidación, recaudo y giro de regalías* fue reglamentado en 1994 por la Ley 141 y a través de la serie de resoluciones, decretos y las leyes que se expidieron posteriormente hasta antes de 2011, fecha en que el sistema es drásticamente reformado⁸. Para el caso de los metales preciosos, el marco jurídico creado autorizó como agentes liquidares y retenedores de regalías a los compradores, fundidores o procesadores de metales preciosos. A los operadores mineros también se les asignó la responsabilidad de declarar el pago de regalías—sin ser el único ni principal responsable de declaración de las mismas. A las alcaldías municipales se les encargó llevar registro y control de las operaciones mineras dentro de su territorio, así como de la producción por éstas obtenida. Además, al igual que a las gobernaciones de los departamentos productores, también se les asignó la responsabilidad y oportunidad de definir el uso y la distribución de las regalías transferidas directamente bajo los lineamientos establecidos por el marco jurídico vigente (Dirección de Regalías – DNP, 2007).

En cuanto a las regulaciones sobre el proceso minero, la *Ley 685 de 2001 o Código de Minas*, vigente a agosto de 2017, estableció el contrato de concesión como único instrumento o título minero para regular las actividades de exploración, explotación, transporte y beneficio del oro de cualquier operación minera. Se simplificó así el marco jurídico con el propósito de incentivar la entrada de particulares en el sector minero. El contrato le es otorgado a la persona natural o jurídica que lo solicite siempre y cuando el área solicitada para explotar sea un área libre y el proponente cumpla con los requisitos establecidos por los artículos 271 – 273 y los Decretos 935 y 1300 de 2013 que los reglamentaron⁹. De acuerdo con este marco jurídico, la elección del concesionario sigue el

⁸ En la cartilla elaborada por la Dirección de Regalías del DNP (2007, pp. 5 – 15) es posible encontrar un resumen de la serie de normas y disposiciones que configuraron el marco jurídico que a 2007 regulaba la liquidación, pago, distribución y uso de las regalías en Colombia.

⁹ Según el artículo 271, la propuesta para contratar, además del nombre, identidad y domicilio del interesado, debe contener: “a) El señalamiento del municipio, departamento y de la autoridad ambiental de ubicación del área o trayecto solicitado; b) La descripción del área objeto del contrato, y de su extensión; c) La indicación del mineral o minerales objeto del contrato; d) La mención de los grupos étnicos con asentamiento

principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”. La escogencia entonces no responde a un proceso de selección objetiva. Si de acuerdo con la información disponible el área se encuentra libre, y el solicitante cumple con los requisitos mínimos establecidos, el contrato de concesión es otorgado para que labores de exploración puedan ser iniciadas¹⁰.

Por último, cabe mencionar que, con el mismo propósito de generar un marco institucional que incentive la inversión privada en la exploración y explotación del recurso minero, se adoptaron entre 2003 y 2004 incentivos tributarios a la actividad minera y, dentro de la Política de Seguridad Democrática (PSD), medidas orientadas a garantizar mejores condiciones de seguridad física.

Auge minero

Alrededor de 2001 el auge generado en el sector minero se refleja en el incremento en el gasto mundial de exploración en metales no ferrosos. Según las cifras disponibles en los reportes anuales del Metal Economics Group (MEG) que monitorea la actividad mundial en exploración en este tipo de recursos desde 1993, de US\$1,9 miles de millones en 2002 se pasó a US\$13,2 miles de millones invertidos en proyectos de exploración en 2008 (una variación de 594,74%); partiendo de 7,7 miles de millones de dólares en 2009, esta cifra alcanzó un máximo histórico en 2012 de US\$21,5 miles de millones (una variación de 179,22%). Aunque entre en 2013 y 2015 este gasto se redujo cada año en promedio 24,53%, el gasto en 2015 (US\$9,2 miles de millones) se ubicó aún por encima del promedio registrado entre 1993 y 2015—US\$7,34 miles de millones¹¹.

Esta misma fuente resalta que la exploración en oro ha sido el principal destino de este gasto global y Latinoamérica ha sido la región que más ha captado los recursos disponibles—46% del total, en promedio, entre 2003 y 2010 y 41.5% entre 2014 y 2015. Si bien en 2008 se reportó que el 83% del gasto realizado se concentró en México, Perú, Chile, Brasil y Argentina, entre 2013 y 2015 Colombia figuró como el quinto país de la región que

permanente en el área o trayecto solicitados y, si fuere del caso, el hallarse total o parcialmente dentro de zona minera indígena, de comunidades negras o mixtas; e) Si el área abarca, en todo o en parte, lugares o zonas restringidas para cuya exploración y explotación se requiera autorización o concepto de otras autoridades, deberán agregarse a la propuesta de acuerdo con el artículo 35; f) El señalamiento de los términos de referencia y guías mineras que se aplicarán en los trabajos de exploración y el estimativo de la inversión económica resultante de la aplicación de tales términos y guías; g) A la propuesta se acompañará un plano que tendrá las características y especificaciones establecidas en los artículos 66 y 67 de este Código. La propuesta deberá verse en el modelo estandarizado adoptado por la entidad concedente”. El proponente se compromete además a realizar a cabo sus actividades siguiendo las guías minero ambientales que las autoridades mineras y ambientales definan (art. 272) y a resolver dentro de los plazos establecidos las observaciones que la autoridad minera realice por incumplimiento (parcial o total) de alguno de los requisitos arriba establecidos.

¹⁰ Durante la etapa de exploración debe el concesionario recolectar la información requerida para elaborar el Plan de Trabajos y Obras (PTO) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) siguiendo las indicaciones establecidas para esta etapa en las guías minero-ambientales. Con el PTO, el EIA y el plan de manejo ambiental solicita a la autoridad ambiental correspondiente la licencia ambiental que le permita iniciar labores de explotación.

¹¹ El buen comportamiento de los precios entre 2001 y 2012, y su posterior deterioro, está fuertemente asociado con el comportamiento de estas cifras.

más atrajo el gasto en exploración de metales no ferrosos. Oro, especialmente, y metales básicos han sido los recursos en que el gasto en la región se ha enfocado.

La Figura 1 evidencia como en relación estrecha con lo dicho arriba la inversión extranjera directa (IED) en el sector minero colombiano presentó una tendencia creciente entre 2002 y 2013. Entre 2000 y 2010, en promedio, el 25.7% del total de la IED se enfocó en el sector minero y en 2009 (US\$ 3.014,03 millones) y 2013 (US\$2.977,27) la IED en minería alcanzó sus máximos valores en el periodo que va de 1994 a 2015. Entre 2014 y 2015, también de manera coincidente con el deterioro de los precios internacionales, ésta se redujo—82% entre 2013 y 2015. La figura 2 ilustra el aumento en el precio del oro.

Figura 1. Inversión extranjera directa (IED) en la minería en Colombia (1994 – 2014)

Fuente: Banco de la República, cálculos propios

Figura 2. Precio internacional del oro (1990 – 2015) (USD/oz troy)

Fuente: World Gold Council, elaboración propia

Como reflejo de esta mayor disponibilidad de recursos para invertir en el sector y financiar actividades de exploración minera, así como del contexto institucional favorable, el número de títulos mineros entregados a particulares, esto es, de contratos de concesión aprobados, también se incrementó durante el periodo de tiempo analizado (figura 3). Así, mientras entre 1990 y 1999 se entregaron anualmente en promedio 160,10 títulos mineros, 19,30 de ellos para minería de oro, en promedio, la media anual entre 2000 y 2009 fue de 632,90 títulos mineros, 136,18 de los cuales fueron nuevas autorizaciones para minería de oro—una variación del 605,6% respecto a la media de títulos para minería aurífera otorgados en la última década de los noventa¹². En abril de 2011, cuando se suspendió temporalmente la entrega de nuevos contratos de concesión, Ingeominas tenía registrados 9.408 títulos mineros. En 2013 la Agencia Nacional de Minería (ANM), la nueva entidad con funciones delegadas de autoridad minera, tenía registrados 10.158 títulos mineros, 10,3% de los cuales eran autorizaciones para el ejercicio de la minería de oro (Escobar & Martínez Beltrán, 2014).

Figura 3. Títulos mineros entregados en Colombia (1990 – 2011)

Fuente: Ingeominas (2012), elaboración propia

* Antes de la moratoria en la entrega de nueva licencias (abril 2011 – mayo 2013)

A la par, tal y como se aprecia en la Figura 4, los datos oficiales de producción de oro dan cuenta de un incremento anual promedio de 12% entre los años 2000 y 2015. Mientras la producción media del periodo 2000 – 2009 (31,3 toneladas) fue 20,41% superior a la media registrada en la década de los noventa (26 toneladas), el promedio producido anualmente entre 2010 y 2015 (58 toneladas) fue 86% superior al del periodo 2000 – 2009 y 123% mayor al del periodo comprendido entre 1990 y 1999. Si se considera que según los datos de sus reportes oficiales Gran Colombia Gold y Mineros SA no aportaron más del 11%

¹² Aquí se tienen en cuenta y totalizan la diversidad de instrumentos legales existentes—o tipos de títulos mineros—para autorizar el ejercicio de la actividad. Los datos fueron compartidos por Ingeominas en 2012, entonces autoridad minera.

de la producción total entre 2011 y 2014, y que en el periodo de tiempo considerado ningún proyecto aurífero inició labores de explotación, se tiene que la mayoría de la producción de oro ha provenido de un número creciente de operaciones a pequeña escala que emplean tanto métodos mecanizados como artesanales para la extracción y beneficio del recurso. Se tiene además que, según los datos del Censo Minero Departamental realizado entre 2010 y 2011, del total de UPMO censadas cerca del 86% operaba para entonces sin título minero y menos de la mitad ejercían sus labores siguiendo los estándares contables, laborales, mineros y ambientales dispuestos en la legislación vigente. En pocas palabras, la mayoría de la creciente producción de oro ha provenido de unidades a pequeña escala, artesanales y mecanizadas, y de operaciones que ejercen sus actividades en condiciones de informalidad y no legalidad.

Figura 4 - Producción de oro en Colombia (toneladas) entre 1990 y 2014

Fuente: Sistema Minero de Información Minero Colombiano (SIMCO). Elaboración propia.

Como reflejo de esta expansión, las cifras del sector en materia de impuestos, regalías y exportaciones también presentaron durante el periodo analizado un incremento, en términos absolutos y relativos. Según cálculos de Chen y Perry (2014), el recaudo en regalías e impuestos asociados al sector minero pasó de representar medio punto porcentual en el total de ingresos del Gobierno en el año 2000 a 1.6% en 2011 y durante este periodo los municipios mineros percibieron un mayor ingreso total que coincide con un mayor nivel de gastos e inversión municipal (Ibáñez & Laverde, 2014). Respecto al caso específico de las regalías en metales preciosos se observa que, si bien la media anual de su

participación en el total de regalías recaudadas fue de apenas 8% entre 2000 y 2010, según las cifras oficiales del SIMCO, las regalías generadas por producción de metales preciosos crecieron a un ritmo de 31% al año, en promedio, en el mismo periodo de tiempo. Por su parte, las exportaciones de oro no monetario aumentaron en promedio 5% entre 2003 y 2015, y las exportaciones mineras pasaron de representar cerca del 10% del total en 2000 a representar el 25% en 2009 (Chen & Perry 2014).

Dificultad para asegurar la aplicación del marco jurídico vigente en todo el territorio nacional.

Sin excepción, todos los actores entrevistados en desarrollo de esta investigación señalaron la debilidad de los actores estatales correspondientes para aplicar el marco institucional minero-ambiental vigente y efectivamente regular un sector en rápida expansión. En palabras de un funcionario boyacense, *“uno para administrar es un problema”*. La falta del personal técnico requerido; la escasez de recursos con los cuales financiar la regulación y el monitoreo del sector, así como la asistencia técnica necesaria; problemas de acceso a cada UPMO bien sea por razones geográficas o de seguridad; y la gran cantidad de trámites y procedimientos administrativos que diariamente deben asumir los equipos de profesionales y contratistas disponibles, son algunas de las principales razones esbozadas. Igualmente, la dificultad para coordinar agendas de trabajo conjuntas entre los sectores minero, judicial, de defensa, ambiental, del interior, agricultura, laboral y salud, ha dificultado hacer un acompañamiento integral a las unidades de producción y a temas transversales a la cadena de valor en los que más de una jurisdicción o sector participa.

La serie de estudios encargados por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) para la expedición en 2014 del Plan de Ordenamiento Minero (PNOM) confirman lo anterior. Según éstos, las dificultades de coordinación e integración entre los actores estatales encargados de la regulación del sector son evidentes (Ponce Muriel, 2014) y se intensifican en el nivel local (Zapata, 2014). Aquí, la implementación del marco institucional vigente se descarga en corporaciones autónomas regionales, entes territoriales, representantes de la autoridad minera, operadores judiciales y organismos de control, todos éstos actores con escasa presencia en el territorio, pocos recursos para financiar sus actividades e insuficientes capacidades. En el nivel nacional, la ANM no escapa a los problemas para visitar y fiscalizar cada título minero con la frecuencia requerida; los avances realizados en la materia, además, reportaron que buena parte de los títulos vigentes deberían ser caducados (Escobar & Martínez 2014). En esta línea, Ibáñez y Laverde (2014) resaltan como los municipios mineros, en especial los productores de oro y plata, se encuentran, en comparación con el resto de municipios del país, más alejados de los principales centros productivos y presentan una menor presencia de las organizaciones del Estado.

De esta debilidad por parte de los actores del Estado, se desprenden dos consecuencias principales, relevantes para nuestro análisis. Por un lado, la entrada de actores al sector aurífero en las diferentes etapas del proceso minero y la cadena de valor no ha sido adecuadamente regulada u organizada. Los operadores seleccionados no son los más idóneos desde el punto de vista técnico (Benavides, 2014), los resultados del trabajo de

campo sugieren la no existencia de mayores barreras para participar en la comercialización del metal y los AAML han encontrado múltiples oportunidades y pocas restricciones para entrar (o permanecer) y diversificar su participación en los diferentes eslabones de la cadena de valor (Massé & Camargo 2013; Massé 2016a y 2016b; Rettberg & Ortiz-Riomalo 2014a y 2016). Además, no pocos títulos han sido otorgados en zonas de vocación agrícola, en donde por las características de los ecosistemas involucrados los riesgos ambientales son altos (Blanco Freja & Sanclemente Zea, 2014; UPME, 2014) o en donde los AAML aún hacen presencia.

Por otra parte, ha resultado difícil ampliar los márgenes de la legalidad en el sector y regularlo con base en las disposiciones y estándares vigentes. Como ya lo mencionamos en la introducción y lo reiteramos en la sub-sección anterior, la mayoría de UPMO operan en condiciones de ilegalidad e informalidad. Igualmente, según también lo sugieren los resultados del trabajo de campo realizado, bajo estas mismas condiciones se han ejercido la mayoría de actividades de compra y venta de oro. La Tabla 1 ilustra algunos de los impactos de la actividad minera en las comunidades implicadas.

Minería de oro: aspectos técnicos

Lavandaio (2008) divide la minería de gran escala en dos fases, la pre-inversión y la explotación. La primera fase requiere gran capacidad tecnológica para identificar ubicación, volumen y calidad de los minerales disponibles. Los actores involucrados requieren capacidad de inversión y la disposición a aceptar rendimientos sólo en el largo plazo (hasta diez años más adelante), cuando los yacimientos bajo estudio arrojen resultados. Esto explica por qué la minería a gran escala tiene elevadas barreras de entrada a otros competidores formales. Sólo un diez por ciento de las actividades exploratorias procede a la siguiente fase de exploración (Lavandaio 2008), que implica la extracción, el procesamiento y su comercialización del mineral.

La mayor parte de la actividad minera colombiana no pertenece a este tipo de minería a gran escala (en efecto, se estima que menos del veinte por ciento de las operaciones mineras caben en esta categoría). Ello contrasta con que la mayor parte de la inversión extranjera directa (IED) en minería apunta a desarrollar la gran escala.

Las operaciones mineras de menor escala ocurren de dos formas: la minería de *aluvión*, de tipo manual, en el que se “lava” el oro en las riberas de ríos y las terrazas aluviales con ayuda de técnicas artesanales, mecanizadas y semi-mecanizadas, o de *veta*, en la que se abren socavones en la roca siguiendo los rastros del oro. En este último tipo de minería se requieren mayores capacidades técnicas, explosivos, y también se obtiene mayor ganancia por el volumen del material extraído. En ambos casos se trata de operaciones de pequeña o mediana escala, intensivas en mano de obra y con pocas barreras a la entrada, y que requieren una menor capacidad de inversión que operaciones a gran escala. En parte porque se invierte menos en infraestructura, las operaciones de pequeña escala representan también los mayores riesgos de salud y seguridad para los trabajadores, incluyendo el riesgo de que colapsen los socavones, como ocurre con frecuencia, y el riesgo de envenenamiento por mercurio, la sustancia utilizada para separar el oro de otros

elementos.¹³ En cuanto a la recuperación del mineral, estas pequeñas operaciones son menos eficientes, pues sólo logran recuperar entre 20-60 por ciento del mineral, en contraste con alrededor del 90 por ciento en el caso de las operaciones de gran escala (Echeverry & Jaimes, 1988; MADS, 2012; Sarmiento et al., 2013; Saldarriaga-Isaza, Villegas-Palacio & Arango, 2013; Pantoja & Pantoja, 2016).

Tabla 1. Impactos institucionales, sociales, económicos y ambientales de la actividad minera colombiana	
a. Debilidad estatal: incertidumbre, temor y riesgos de corrupción	<ul style="list-style-type: none"> • Incapacidad de controlar el ejercicio de la minería, por temor o por herramientas jurídicas insuficientes • Desconocimiento de las reglas, normas y leyes que rigen el sector minero • Vacíos normativos, poca planeación integral y reducido seguimiento del desarrollo minero (reflejada, por ejemplo, en tensiones entre diferentes tipos de actividad económica) • Desconocimiento de las competencias de las diferentes entidades e instancias involucradas, falta de claridad sobre responsabilidades (e.g. regulación de tenencia y usos de la tierra), y desarticulación institucional para controlar el fenómeno • Comunidades ignoran o evaden mandatos estatales • Amenazas a funcionarios públicos • Corrupción
b. Conflictos sociales y convivencia, distorsiones económicas y daño ambiental	<ul style="list-style-type: none"> • Migración e incrementos poblacionales • Inseguridad • Aumento en el consumo de alcohol y alucinógenos • Prostitución • Trabajo infantil • Morbilidad y baja seguridad industrial • Embarazo juvenil • Problemas de tránsito • Daños ambientales y de paisaje • Riesgos de seguridad industrial y de seguridad social • Conflictos con otras actividades económicas (principalmente la agricultura) • Hostilidad hacia empresas de gran tamaño • Desplazamiento forzado
c. Criminalidad diversificada	<ul style="list-style-type: none"> • Presencia de organizaciones armadas ilegales tradicionales (FARC y paramilitares) y de bandas criminales (BACRIM) • Explotación ilegal, extorsión, lavado de activos • Mercados ilícitos (armas, motos, celulares, combustible, contrabando de bienes comerciales)

Fuente: Rettberg et al. (2013).

¹³ Los impactos sobre la salud tienen que ver especialmente con envenenamiento o contaminación con mercurio, conducente a enfermedades respiratorias y malformaciones al nacer (Sieber & Brain, 2014).

El tipo de actores económicos involucrados en el negocio minero en cada una de estas etapas varía de forma significativa: mientras que las operaciones de gran escala son dominadas por compañías de gran tamaño, formales y muchas veces basadas en capitales multinacionales con grandes capacidades de inversión y tecnología y de transmisión de conocimiento de un lugar a otro, en las operaciones de pequeña escala dominan los actores locales, muchas veces informales, algunos anclados en prácticas tradicionales, otros novatos en el oficio, dotados de herramientas e infraestructura artesanales o semi-mecanizadas. Todas las operaciones son vulnerables a las fluctuaciones del precio del mineral, pero debido al mayor riesgo que corren, los trabajadores y conductores de operaciones a pequeña escala son más propensos a fluctuar entre actividades, abandonando o retomando la minería según sus posibilidades de generación de ingresos.

Minería de oro, conflicto armado y criminalidad

En el contexto particular de la minería aurífera en Colombia, con el ánimo de financiar sus agendas económicas o políticas, los AAML han participado en los ingresos y rentas generadas en las distintas etapas del proceso minero o la cadena de valor del oro (Echandía, 1999, Escobar, 1999, Rangel, 1990 en Vélez, 2001; Vélez, 2001; Gómez Buendía, 2003). Igualmente, han aprovechado los espacios generados por la descentralización fiscal y administrativa iniciada en la década de los ochenta y por el régimen de regalías vigente hasta 2011, arriba presentado, para participar en el pago y distribución de estos recursos así como en los presupuestos municipales (Vélez, 2001; Gómez Buendía, 2003; Sánchez & Chacón, 2005).

La apropiación del oro por parte de los AAML se ha dado de *manera directa*, e.g. asignando capital y trabajo a operaciones mineras conducidas por ellos o sus socios (Massé & Camargo, 2013; Massé, 2016; Rettberg & Ortiz-Riomalo, 2014a) o *de manera indirecta*, principalmente, e.g. a través del cobro de extorsiones o impuestos ilegales a operadores mineros, a pequeña, mediana o gran escala, y tanto en etapa de exploración como de explotación (Gómez Buendía, 2003; Muñoz & Giraldo, 2012; Giraldo, 2013; Massé & Camargo, 2013; Rettberg & Ortiz-Riomalo, 2014a). Su presencia en una región aurífera puede deberse al propósito de controlar la explotación y comercialización del recurso o a que las características del territorio lo hacen valioso a la luz de sus propósitos, e.g. territorio o corredor estratégico para sus actividades y operaciones militares. En este caso no es la explotación del oro lo que *motiva* única o principalmente su presencia, pero sí le permite *complementar* los ingresos obtenidos en otras actividades económicas que se llevan a cabo en el territorio, e.g. narcotráfico o secuestro extorsivo (e.g. Giraldo & Muñoz, 2012; Rettberg & Ortiz-Riomalo, 2016). La coexistencia de ambos motivos se evidenció durante el trabajo de campo, y se resalta en Vélez (2001), Gómez Buendía (2003) y Rettberg y Ortiz-Riomalo (2014a y 2016).

Tanto el objetivo específico de apropiarse del recurso o de los ingresos o rentas generados por éste han sido parte de las estrategias de los grupos guerrilleros, FARC y ELN, desde el final de los años setenta y la segunda mitad de la década de los ochenta cuando deciden acentuar su proceso de expansión para materializar su objetivo general de toma del poder (Echandía, 1999, Escobar, 1990, Rangel, 1990 en Vélez, 2001; Vélez, 2001; Gómez

Buendía, 2003). Igualmente, los grupos paramilitares, articulados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desde la segunda mitad de la década de los noventa, así como varias de las organizaciones criminales o neo-paramilitares que los han sucedido tras su desmovilización entre 2003 y 2006, han tenido objetivos específicos y estrategias similares de presencia en el territorio para asegurar fuentes de financiación de sus agendas. El proceso de expansión de los AAML que alcanza su pico en 2003 (ver capítulo introductorio) se asocia en consecuencia con un aumento de la competencia por el recurso y esto, a su vez, se (co)relaciona con incrementos en el conflicto violento (e.g. Gómez Buendía, 2003; Idrobo et al., 2010; Giraldo & Muñoz, 2012).

Ahora bien, en nuestras definiciones reconocemos que el conflicto no necesariamente es violento. Como en la sección anterior se mencionó, el inicio de (nuevos) proyectos y operaciones de exploración y explotación minera ha estado asociado a tensiones y discrepancias entre actores estatales y no estatales, ubicados en diferentes niveles de gobierno, en torno a la actividad económica como alternativa de desarrollo (sostenible). Bien sea por sus (potenciales) *impactos sobre actividades en otros sectores*, como la agricultura o la pesca, *sobre la conservación de ecosistemas estratégicos* como páramos, humedales, parques naturales o reservas forestales, o *sobre la minería llevada a cabo en operaciones de menor escala*, los actores afectados en estas situaciones se oponen al ejercicio de la minería de oro, en general, o a modos particulares de ejercerla, e.g. a la minería no legal, a la minería a mediana escala no legal o a la minería a gran escala formal, legal (Pérez-Rincón, 2014, realiza un inventario este tipo de conflictos en Colombia).

A la par de lo anterior, la intensificación de la actividad minera, con el inicio de nuevas operaciones de exploración y explotación de oro, en un contexto de debilidad estatal, ha estado asociada al deterioro de indicadores de convivencia y seguridad local. Aquí, según lo reportado por los actores entrevistados en campo, los flujos migratorios de trabajadores y operadores mineros, así como el abrupto incremento en los ingresos de éstos, se relaciona con el incremento en el costo de vida, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo y la drogadicción, la prostitución, las riñas y los hurtos (e.g. Rettberg et al. 2013; Romero, 2016).

En síntesis, se tiene que el auge en la minería de oro se conecta con el conflicto armado al, *directa o indirectamente*, ofrecer nuevas y mejores alternativas de financiación de las agendas de los AAML. Si bien captar estos recursos en distintas partes de la cadena de valor y del pago y distribución de regalías constituyen fuente importante de ingresos y financiación, no es posible establecer, como se verá, que este sea necesariamente el principal o único motivo de la presencia de un AAML en un territorio determinado¹⁴. Las disputas recientes entre AAML en torno a estos recursos se pueden asociar estadísticamente a aumentos en el conflicto violento (Idrobo et al. 2013; Ibáñez y Laverde 2014)¹⁵ y el inicio de nuevas operaciones se puede relacionar, al menos de manera cualitativa, con el deterioro de indicadores de convivencia y seguridad en el ámbito local, comunitario (Rettberg et al. 2013). Por su parte, las discrepancias en torno a la expansión de la minería de oro, en general, o de modos particulares de ejercerla, desatan el conflicto

¹⁴ Tampoco a la disputa por el oro se puede atribuir el origen del conflicto armado en Colombia.

¹⁵ Acuerdos de cooperación entre éstos, por tanto, puede reducir o acabar, al menos temporalmente, el conflicto violento entre AAML (e.g. Garzón et al. 2016, Massé 2016; Rettberg & Ortiz-Riomalo, 2014b).

social y ambiental. Aunque no siempre, el conflicto social y ambiental se puede encontrar *aislado* de la presencia de AAML. Cuando esto no sucede, se vinculan a las dinámicas del conflicto armado: los actores involucrados son víctimas de amenazas, intimidaciones o algún otro tipo de agresión por parte de los AAML involucrados.

Los Cuadros 1A y 1B agrupan las conexiones entre minería de oro, conflicto y criminalidad encontradas para el caso colombiano descritas en los párrafos precedentes. En primer lugar (Cuadro 1A), está la relación de la actividad con el conflicto armado al directa e indirectamente ser fuente de financiación de los agendas de los AAML y de disputa entre éstos—y entre éstos y los actores del Estado que buscan expandir la legalidad en el sector. Aunque no es una relación unívoca, como se verá, esto se asocia a un incremento en el conflicto violento. Está también el conflicto social y ambiental, así como el deterioro en los indicadores de convivencia y seguridad ciudadana (Cuadro 1B) asociado a las tensiones y discrepancias que la actividad causa por sus (potenciales) impactos sobre su entorno económico, social o ambiental. Estas tensiones se tramitan a través de métodos violentos o no violentos (e.g. Pérez-Rincón, 2014) y en presencia o ausencia de AAML (e.g. Rettberg & Ortiz-Riomalo, 2014a).

Cuadro 1A – Conexiones entre minería de oro, conflicto y criminalidad - Saqueo del oro por parte de los AAML

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo realizado en Rettberg y Ortiz-Riomalo (2014a, 2014b y 2016) e información recolectada y analizada para este capítulo

<i>De manera indirecta</i>	<i>De manera directa</i>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ AAML extorsionan o secuestran a operadores mineros o comerciantes con el fin de participar en los ingresos, beneficios o rentas de la minería del oro. ➤ A cambio, permiten operar, no agreden o protegen a las unidades de producción o a sus operadores y trabajadores mineros. ➤ Influyen en la asignación o distribución de recursos en los presupuestos municipales—“clientelismo armado”. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ AAML se involucran directamente en actividades de explotación o comercialización, e.g. en la cadena de valor: <ul style="list-style-type: none"> – Inician actividades de explotación, beneficio y comercialización del oro en terrenos de su propiedad o en áreas en las que ejercen control. – Asignan a alguna etapa del proceso minero capital y trabajo flotante del narcotráfico u otra fuente de ingresos. – Participan en la comercialización del oro bien sea como intermediarios, o como propietarios o socios de casas de compra y venta de oro. – Cuando sobre un territorio aurífero ejercen control: Facilitan el acceso a insumos, equipos o herramientas o simplemente permiten su tránsito ➤ Además de influir en la asignación de los presupuestos municipales, en asocio con autoridades AAML participan en la declaración, liquidación y distribución de las regalías generadas por la explotación del oro.

Repercusiones sobre el conflicto armado

Recursos captados como combustible del conflicto—financiación de las agendas de los AAML

- Complementan o sustituyen otras fuentes de financiación, e.g. **narcotráfico y secuestro**.
 - Participación directa e indirecta en la actividad sirve para respaldar operaciones **lavado de activos** obtenidos en otras actividades criminales.
-

Aumento de la confrontación

- **Ataques a las instalaciones y operaciones** de las unidades de producción o comercialización para forzar pagos de extorsión y como mecanismos de intimidación
 - **Disputas** por el oro **entre AAML generan un aumento del número de homicidios**. Por el contrario, el indicador puede disminuir o no verse afectado por acuerdos de cooperación entre AAML
 - **AAML confrontan actores—estatales o no estatales—que perjudican o podrían perjudicar** la continuidad de **operaciones mineras de las que obtienen recursos** para financiarse.
-

Cuadro 1B – Conexiones entre minería de oro, conflicto y criminalidad – Minería de oro y conflicto social y ambiental

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo realizado en Rettberg y Ortiz-Riomalo (2016, 2014a y 2014b) e información recolectada y analizada para este capítulo

- Se cuestiona la actividad minera como alternativa de desarrollo sostenible, bien sea:
 - Por sus (potenciales) impactos sobre otras actividades económicas, e.g. agricultura o pesca.
 - Por sus (potenciales) impactos sobre la oferta de servicios ecosistémicos, e.g. provisión de agua.
 - Se cuestiona el modo de ejercer la actividad minera.
 - Entre minería a pequeña escala, artesanal, y minería a pequeña o mediana escala, mecanizada
 - Entre minería a gran escala y minería a pequeña escala.
 - Tensiones entre trabajadores y operadores mineros vinculados a operaciones mineras de diferente tipo y escala.
 - Presencia de uno o varios de estos aspectos: alcoholismo, drogadicción, prostitución, riñas, violencia intrafamiliar y hurtos.
-

Repercusiones

- Conflicto (violento y no violento) entre residentes de un territorio y nuevos operadores o trabajadores mineros.
 - Deterioro de la convivencia y la seguridad ciudadana.
 - Conflictos se tramitan de manera pacífica o violenta, con o sin interferencia de AAML
-

Por su parte, la tabla 2 clasifica las conexiones encontradas según las categorías planteadas en el marco analítico del libro, en el capítulo introductorio, y especifica las etapas del proceso minero en que se presentan. Se observa en el cuadro que en la minería de oro se evidencian los tres tipos de relación entre recursos, conflicto y criminalidad—*aislamiento, motivación o complementariedad*. Las casillas sombreadas con un color gris menos intenso, en la tabla 2, hacen referencia a que, como se mencionó, si bien el conflicto social y ambiental no necesariamente se asocian a las dinámicas del conflicto armado, esta situación cambia cuando los AAML hacen presencia en la región aurífera, bien sea por *motivación o complementariedad*. Con base en esta información, en la siguiente sección identificamos en los casos incluidos la presencia o ausencia de las conexiones identificadas entre minería de oro, conflicto y criminalidad, así como los posibles mecanismos que los soportan.

Tabla 2 – Conexiones entre minería del oro, el conflicto y la criminalidad: categorías y etapas del proceso minero en que se presentan.

Fuente: Elaboración propia.

Conexión		Etapa			Categoría		
		1	2	3	A	C	M
Captura y disputa del oro, sus ingresos y rentas, por parte de AAML							
Conflicto social y ambiental							
Convenciones:		(1): Exploración. (2): Explotación (3): Comercialización.			(M): Motivación. (C): Complementariedad. (A): Aislamiento.		
	Presencia de la conexión en mayor medida						
	Presencia de la conexión en menor medida						

Como puede apreciarse, cada una de las fases del negocio minero brinda oportunidades para que actores ilegales puedan desviar ingresos hacia sus arcas. Para desglosar el negocio minero de acuerdo con las formas que adopta el saqueo del recurso en esta sección lo dividimos en tres fases: la exploración, la extracción y el beneficio, y la comercialización. Como se verá a continuación, la fase más crítica en términos de vulnerabilidad es la fase extractiva y la del beneficio, cuando el oro es recuperado de vetas o aluviones, se beneficia y se vende.

Exploración

La exploración es una actividad liderada por las operaciones de gran escala, pues las operaciones de mediana y pequeña escala dependen menos del conocimiento geológico y más de la tradición y el rumor en las comunidades mineras (Giraldo & Muñoz 2012; MADS, 2013; y trabajo de campo realizado para esta investigación). Como ocurre también con otros recursos extractivos (ver los capítulos sobre carbón, de Daniel Quiroga, y sobre petróleo, de Angelika Rettberg y Juan Diego Prieto, también en este libro), es común la

extorsión de las compañías y de la actividad exploratoria. Así, tanto el inicio como la continuación de las actividades exploratorias son sometidas a diferentes formas de presión armada—como la obstaculización de las vías, la voladura de infraestructura o los secuestros de personal—con el propósito de lograr pagos a las organizaciones armadas. El sabotaje de las operaciones tiende a reflejar la falta de cumplimiento en los pagos comprometidos o un interés por elevar los pagos de funcionamiento. Las compañías mineras han adoptado distintas estrategias de protección frente a la extorsión: Muchas logran acuerdos con los actores en torno al pago de determinadas sumas, acuerdos que no son conocidos públicamente y que reflejan la debilidad estatal para prestar seguridad y protección en muchas zonas del país. Otras han firmado acuerdos de protección y seguridad con las fuerzas oficiales y han contratado empresas privadas de seguridad (Massé & Camargo 2013).

Además de la extorsión, la fase exploratoria genera otros riesgos de seguridad para las zonas de operaciones mineras derivadas de las expectativas que despiertan los proyectos: Donde la agricultura juega un papel importante o donde coincide con páramos y humedales la perspectiva de la extracción minera ha despertado temores relacionados con sus impactos ambientales, sociales y laborales. Además, la expectativa de la masiva entrada de capitales e ingresos se constituye como incentivo para activar las esperanzas de las comunidades en torno a la solución de problemas estructurales relacionados con educación, salud y empleo. Datos del CINEP confirman esta tendencia y sugieren que los conflictos y movilizaciones sociales en zonas mineras han aumentado significativamente desde 2008 (CINEP/PP, 2012). Pérez-Rincón (2014), por su parte, documenta 72 casos de conflictos socio-ambientales ocurridos en Colombia desde 1956 y encuentra que cerca del 77% se relacionan con el sector minero-energético (14,4% con minería, específicamente). Muchas veces, estas formas legítimas de protesta social son permeadas por actores ilegales para el logro de sus propósitos extorsivos, agravando el curso de la protesta y generando reacciones coercitivas por parte de las autoridades.

Extracción y beneficio

El grueso de las conexiones entre minería de oro, conflicto armado y criminalidad tiene lugar en la fase de extracción y beneficio (consistente en la separación del mineral de la roca que lo contiene), tanto en términos de la diversidad de las conexiones como en cuanto al valor de las sumas de dinero involucradas. Es esta la fase más intensiva en mano de obra, a la vez que aquella en la que los actores son más vulnerables a conectarse con actividades ilegales (Giraldo & Muñoz, 2012; Massé & Camargo 2013).

Los vínculos indirectos son los más prevalentes e incluyen los siguientes: Al igual que en la fase exploratoria, la extorsión y los pagos por protección atraviesan la actividad. Además, pueden señalarse varios vínculos directos entre la minería de oro y los actores armados: Por ejemplo, la entrada a las minas es gravada por bandas criminales y actores armados, quienes cobran hasta el cincuenta por ciento de las ganancias de una sola mina. Estimamos que la extorsión y el control ilegal de las minas representan ingresos entre uno y dos millones de dólares mensuales por región minera a los grupos armados ilegales y a las bandas criminales (Rettberg & Ortiz-Riomalo, 2014a). También han surgido alianzas

informales entre trabajadores y dueños mineros y actores ilegales en torno a la extracción y la transformación del mineral, la adquisición de equipos, así como el control y la administración de las minas. Así, los actores ilegales aprovechan el conocimiento y la experiencia de los mineros y logran obtener un porcentaje de las ganancias. Algunos actores incluso han creado compañías ficticias con el propósito de legalizar su participación en este tipo de actividades (e.g. Massé & Camargo, 2013).

Los trabajadores mineros y dueños de las minas no son sólo espectadores impotentes de esta situación. En distintas regiones han colaborado con actores armados o han pagado sobornos a las autoridades para obtener algunos de los insumos de la actividad minera, como explosivos (utilizados para la destrucción de la roca y la construcción de socavones y que sólo vende oficialmente el Estado colombiano), mercurio y cianuro (utilizados para separar el metal de otros elementos), así como diferentes tipos de equipo, como dragas y retroexcavadoras. Con el objeto de disuadir a las autoridades del cumplimiento de las reglas mineras y ambientales, en ocasiones trabajadores y dueños mineros han colaborado con actores ilegales para presionar a las autoridades por medio de protestas, generando oportunidades para que el descontento social y la protesta se confundan con las dinámicas del conflicto armado y la criminalidad.

En esta fase extractiva también se ha visto de forma más pronunciada la manera en la cual ante el incremento del precio y los fuertes golpes recibidos por los cultivos ilícitos en el marco de la guerra contra las drogas, una mano de obra redundante del tráfico de drogas ha sido absorbida por la actividad minera¹⁶. Esta migración de un recurso a otro ha sido reportada en varias zonas del Sur del país, incluyendo los departamentos de Nariño y Putumayo y el Bajo Cauca. De acuerdo con un funcionario de la alcaldía en Los Andes Sotomayor (Nariño), la población de la región ha trabajado históricamente en ambas actividades, dependiendo del comportamiento de los mercados. Señalando hacia unos cultivos de café contiguos a un beneficiadero de oro dijo “hace dos años esto todo era coca”.

En resumen, son diversas las maneras en las que actores ilegales permean la extracción y el beneficio del oro, en especial en el caso de las operaciones de pequeña escala, que son más vulnerables. Con gran frecuencia, los actores ilegales regulan y administran el proceso minero y aportan capital para la adquisición de insumos y maquinaria y la repartición de las ganancias. Es menos frecuente, pero también ocurre, que los actores asuman directamente la extracción del oro.

Las conexiones entre la minería de oro y el narcotráfico son numerosas y diversas: Por un lado, la minería de oro ha absorbido mano de obra redundante de los cultivos ilícitos abandonados como resultado de la presión estatal. Además, muchos de los grupos ilegales involucrados en la minería de oro mantienen operaciones paralelas relacionadas con cultivos ilícitos, un fenómeno al que en otra parte nos hemos referido como el “portafolio de recursos” de las organizaciones armadas (Rettberg y Ortiz-Riomalo, 2016). Ello se debe tanto a la cercanía física entre minas y cultivos, como a la necesidad de diversificar el riesgo y las fuentes de entrada por parte de los actores armados así como al alza de precios de

¹⁶La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reporta que en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Nariño cerca del 80% de las actividades detectadas de minería de aluvión se encuentran en territorios afectados por cultivos de coca. Esta cifra es del 45% en Bolívar y de entre el 30% y 35% en Chocó, Valle y Antioquia (UNODC, 2016a).

commodities como el oro. Así, el oro y la coca se encuentran profundamente entrelazados en tanto recursos: combustible del conflicto y la criminalidad.

Comercialización

Muchas de estas conexiones se mantienen en la última fase del proceso minero, cuando el oro se vende a redes de intermediarios, a compraventas de oro en las regiones mineras así como a las principales agencias, con sede en Medellín y Cali, con representantes en los principales municipios auríferos. Es en esta fase cuando se calcula el total oficial de la producción aurífera. Es también en este momento que el oro ingresa a los mercados internacionales de valores financieros y de la joyería.

En este momento, para los actores armados el valor del oro trasciende las características del metal, pues se convierte en instrumento hacia el logro de otros objetivos. Los narcotraficantes, por ejemplo, han aprovechado las oportunidades de un mercado minero en bonanza pero sub-regulado para lavar activos en colaboración con autoridades locales y departamentales. Adquieren oro en Panamá, en México o en diversas regiones colombianas, lo transportan hacia municipios “amigos” (a veces en colaboración con empresas legales) en los cuales los funcionarios públicos lo reportan como producido en sus áreas de influencia, cobran regalías con base en los reportes y luego comparten los ingresos con los traficantes. Esto explicaría por qué los volúmenes de exportación del oro exceden la producción registrada del metal¹⁷. Y explicaría también el caso de Maceo, un municipio que consistentemente reporta producción de oro y obtiene regalías, pero no sólo carece de títulos mineros vigentes sino también de operaciones mineras en curso (Giraldo y Muñoz 2012).

La corrupción desde arriba ocurre también en la distribución de regalías. Como en el caso del petróleo y del carbón (ver capítulos de Quiroga sobre carbón y Rettberg y Prieto sobre petróleo), funcionarios de alcaldías, gobernaciones, concejos municipales y asambleas departamentales participan en procesos de contratación para proveer servicios públicos. Una vez obtenido el contrato, una fracción del dinero es utilizado para fines privados o para canalizarlos hacia actores ilegales. La tabla 2, arriba, sintetiza los vínculos directos e indirectos entre la minería de oro, el conflicto armado y la criminalidad en Colombia.

¹⁷ Reportes en medios de comunicación (e.g. *Caracol Radio* 16 de enero de 2015; *El Espectador* 17 de agosto de 2013 y 1 de febrero de 2016; *El Tiempo* 16 de enero de 2015; Luna Amancio 17 de agosto de 2015), así como análisis auspiciados por Asobancaria (2016) y la OECD (Massé & Munevar 2016), entre otros (e.g. FATF & APG 2015) han presentado y detallado los mecanismos a través de los cuales, en el Pacífico y otras regiones mineras en Colombia, los actores armados no estatales han permeado la cadena de valor, en general, y en particular han aprovechado su participación en ésta para hacer parte de la comercialización del metal, captar parte de las regalías y llevar a cabo operaciones de lavado de activos.

Un mismo recurso y varios conflictos: minería de oro, conflicto y criminalidad en seis regiones auríferas (Antioquia, Caldas, Chocó, Nariño, Santander y Tolima)

Las secciones anteriores describieron el contexto general de la minería de oro y su relación con el conflicto armado en Colombia. En esta sección, exploramos algunas diferencias entre regiones mineras. Como aclaramos en la introducción, la atención prestada al nivel subnacional permite mostrar de qué manera, aún manteniendo constantes las condiciones de la institucionalidad nacional y del mercado internacional, arreglos sociales, económicos y políticos específicos a los contextos regionales desarrollados históricamente pueden promover, configurar y también prevenir el desarrollo del vínculo entre recursos y conflicto. Ello da lugar a perfiles regionales diferenciados y que reflejan la mayor o menor vulnerabilidad de las regiones respecto al impacto de la criminalidad y de los actores ilegales vinculados al conflicto armado en la extracción de recursos.

Fuentes y datos empleados

Entre 2012 y 2014 llevamos a cabo 78 entrevistas semi-estructuradas con actores relacionados directa e indirectamente con el sector minero tanto en el nivel nacional como sub-nacional. De éstas, 18 se llevaron a cabo en Bogotá (23% del total) y el resto en las capitales y regiones auríferas visitadas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Chocó, Nariño, Santander y Tolima.

Para la selección de los actores a entrevistar se definió un primer listado de actores integrado por funcionarios y exfuncionarios del sector minero, con amplia participación o responsabilidad en el proceso de toma de decisiones, y líderes de las principales asociaciones gremiales¹⁸. Estos, a su vez, contribuyeron a contactar actores adicionales, a enriquecer el listado inicial y a organizar el trabajo de campo. Por el lado de actores estatales los sectores minero y ambiental son los más representados (21% del total de entrevistas), siendo por parte de este último las organizaciones del Sistema Nacional Ambiental (SINA) del nivel regional los principales actores contactados. Por parte de los actores no estatales, académicos vinculados a universidades o centros de investigación junto a expertos independientes del sector—no afiliados a alguna organización particular—e integrantes de la sociedad civil (en conjunto representan 25% del total) complementan el conjunto de actores no estatales entrevistados, en su mayoría (44%) representados por operadores y asociaciones del sector minero.

Por su parte, para la selección de casos tuvimos en cuenta a los principales departamentos productores de oro, su tradición minera y la presencia de proyectos de exploración considerados importantes. Su importancia se determinó según la información aportada por la revisión de prensa, las entrevistas que paulatinamente se iban realizando y las fuentes secundarias consultadas. Con los enlaces regionales, así como con los contactos nacionales con enlaces regionales, definimos en estos departamentos los municipios y las operaciones mineras a visitar, con base en nuestros intereses y objetivos, la disponibilidad de tiempo de los actores en campo y las facilidades y posibilidades de acceso al territorio.

¹⁸ Para entonces: Asociación de Mineros de la ANDI, Cámara Colombiana de Minería (CCM), Confederación Nacional de Mineros de Colombia (CONALMINERCOL), y Sector de la Minería a Gran Escala (SMGE).

Visitamos y entrevistamos a todos los actores posibles teniendo en cuenta estos propósitos y restricciones—incluyendo la de presupuesto. Con el propósito de disminuir sesgos en la respuesta de los entrevistados, las conversaciones no fueron grabadas y su confidencialidad es preservada. Durante las entrevistas se tomaron notas detalladas y éstas, luego, fueron sistematizadas. En la siguiente subsección, cuando se presentan citas textuales o información específica proveniente de algún actor en particular se omite el nombre y sólo se hace referencia al tipo de actor y lugar de la entrevista.

No obstante su riqueza, y conscientes de las limitaciones de la información recolectada, e.g. la poca representación de actores del sector ambiental y la sociedad civil en el nivel nacional, consultamos las fuentes secundarias—informes, artículos de prensa y literatura académica—así como las bases de datos disponibles con el ánimo de contrastarla, precisarla, complementarla y enriquecerla. De modo similar a lo realizado en las secciones anteriores del capítulo, las fuentes secundarias empleadas se citan y referencian a lo largo del texto, en donde corresponda.

A través de las entrevistas nos propusimos recolectar información para reconstruir el proceso político en el sector minero asociado a la definición, implementación y reforma de las reglas que lo han gobernado entre 1991 y 2012. Específicamente, recolectamos información cualitativa sobre el papel que ha desempeñado cada actor en el mismo, así como sobre sus opiniones, percepciones y evaluaciones personales respecto a la política minera y su proceso de formulación—diseño, aprobación e implementación. Obtuvimos datos sobre los puntos existentes de encuentro y discrepancia entre actores, así como el modo como a partir de éstas se han moldeado las reglas del sector (e.g. Cárdenas, Rettberg y Ortiz-Riomalo, 2013a), sobre las diferencias regionales que caracterizan la puesta en marcha de una política común a todo el territorio nacional (Cárdenas, Rettberg y Ortiz-Riomalo, 2013b), los modos en que la minería de oro se ha relacionado con el conflicto armado y la criminalidad—resumidos en la sección anterior y presentados en detalle en Rettberg y Ortiz-Riomalo (2014a, 2014b y 2016) y respecto los conflictos socio-ambientales que se han presentado en los departamentos visitados. Por lo demás, a través del diálogo con los operadores mineros en las regiones productoras visitadas, al igual que con los actores estatales que han acompañado al sector, nos planteamos obtener información acerca de las actividades de exploración llevadas a cabo y de los diferentes modos de organizar las actividades de extracción, beneficio y comercialización del oro¹⁹. Fue posible caracterizar de manera cualitativa doce UPMO a pequeña escala (Ortiz-Riomalo, 2016) y recolectar información de tres operaciones a mediana y gran escala en etapa de exploración y explotación. Las primeras fueron caracterizadas en torno a sus métodos de producción y las segundas en torno a la etapa del proyecto, métodos empleados o planeados (para las operaciones en exploración); ambas, en torno a rasgos del contexto institucional, socio-cultural y biofísico—aspectos de la geografía y geología del territorio—y sus interacciones con actores, estatales y no estatales, en el nivel municipal, departamental y nacional.

Adquirimos, entonces, información sobre los actores involucrados en la gestión del oro en Colombia en el nivel nacional y sub-nacional, su repertorio de acciones, sus opiniones y

¹⁹ En Ortiz-Riomalo (2016) se discute e implementa un marco conceptual para el análisis de la minería aurífera a pequeña escala.

percepciones, y los patrones de interacción entre ellos. Fue de nuestro interés identificar tanto patrones y características nacionales, como variaciones regionales. En este capítulo empleamos la información que nos ayuda a entender la relación entre la minería de oro, el conflicto y la criminalidad, así como el contexto en que se ha configurado; las características generales, nacionales, de esta relación las presentamos en las dos secciones anteriores. Aquí, a continuación, profundizamos en las dinámicas regionales siguiendo los lineamientos propuestos en el marco analítico del libro. Esto es, primero identificamos qué tipos de relación entre oro, conflicto y crimen, de los presentados en la sección anterior, se presentan en cada caso (la variable dependiente), y en seguida exploramos los factores que pueden asociarse a su presencia o ausencia (las variables independientes y los mecanismos que las relaciones con la variable dependiente). Para esto último consideramos las características del proceso de producción, beneficio y comercialización a nivel de unidad de producción y de su contexto. Si bien, entonces, la unidad de análisis es la operación minera el análisis de su contexto obliga a tener en cuenta dinámicas municipales y departamentales.

Para contextualizar la descripción de los casos, la tabla 3 presenta un breve resumen de las diferencias entre las regiones elegidas aquí, referidas al tamaño del PIB departamental, el peso del sector minero en el PIB departamental, y la producción de los municipios seleccionados. La tabla recalca la importancia de la aproximación subnacional, pues muestra diferencias en el peso de la minería en las finanzas regionales sumadas a diferencias en la contribución de la producción departamental a la nacional. Entre los casos seleccionados, los municipios antioqueños aparecen claramente como los de mayor producción a nivel nacional. En el caso de Santander, aunque la contribución a la producción nacional es baja, la contribución porcentual al PIB departamental es importante.

Tabla 3. PIB departamental y producción de oro en seis regiones colombianas

	PIB departamental (2011, 2005=100, mm), porcentaje del PIB nacional	Importancia del sector extractivo (% del PIB departamental) para 2011, según recurso	Producción en municipios seleccionados (2011) y porcentaje del total nacional
Antioquia	60.688 (13,49%)	Carbón: 0,05%; Petróleo y gas natural: 0,94%; Minerales no metálicos: 0,33%; minerales metálicos: 0,59%	20,8 toneladas (37,2%)
Caldas	7.033 (1,56%)	Carbón: 0,00%; Petróleo y gas natural: 0,00%; Minerales no metálicos: 0,50%; minerales metalíferos: 0,43%	2,03 toneladas (4,11%)
Chocó	2.176 (0,48%)	Carbón: 0,00%; Petróleo y gas natural: 0,00%; Minerales no metálicos: 0,14%; minerales metalíferos: 29,92%	4,5 toneladas (8,05%)
Nariño	6.777 (1,51%)	Carbón: 0,00%; Petróleo y gas natural: 0,00%; Minerales no	0,05 toneladas (0,09%)

		metálicos: 0,31%; minerales metalíferos: 0,04%	
Santander	30.557 (6,79%)	Carbón: 0,07%; Petróleo y gas natural: 4,49%; Minerales no metálicos: 0,43%; minerales metalíferos: 0,003%	0,11 toneladas (0,2%)
Tolima	9.643 (2,14%)	Carbón: 0,00%; Petróleo y gas natural: 8,78%; Minerales no metálicos: 0,49%; minerales metalíferos: 0,04%	0

Fuente: DANE

De igual manera, las figuras 5, 6 y 7 describen el comportamiento del conflicto armado en las zonas estudiadas, de acuerdo con los indicadores de homicidios, secuestros y desplazamientos.

Figura 5 - Tasa departamental de homicidios por cien mil habitantes

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia (2014). Elaboración propia

Figura 6 - Tasa departamental de secuestros por cien mil habitantes

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia (2014). Elaboración propia

Figura 7 - Tasa departamental de desplazamientos por cien mil habitantes

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia (2014). Elaboración propia

Antioquia

El caso prototípico de la relación entre recursos, conflicto armado y criminalidad es el Bajo Cauca, subregión antioqueña compuesta por los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza. Controlada por décadas por narcotraficantes y grupos paramilitares vinculados al narcotráfico, la región es la más poblada de Antioquia y ha sido protagonista histórica de la producción minera de aluvión, ejercida a través de diferentes métodos y en distintas escalas. También en ella los grupos guerrilleros han hecho fuerte presencia como resultado de sus planes de expansión territorial y fortalecimiento de sus finanzas (e.g. Vélez, 2001; Gómez Buendía, 2005; Giraldo, 2013) En el valle del río Nechí opera la única empresa minera de oro de propiedad nacional, Mineros S.A., junto con cientos de mineros informales que buscan su suerte en minas informales y en las laderas de los ríos.

Si bien la minería de oro en la zona data desde la Colonia, el alza de los precios internacionales generó un incremento en la actividad, principalmente por parte de mineros informales. De igual manera, se incrementó la presencia de actores armados al margen de la ley (Giraldo 2013), especialmente tras la desmovilización del grupo paramilitar bajo el mando del ya extraditado Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy. Estos diversos grupos extorsionan a los mineros —quienes deben compartir sus ganancias— y adelantan la gestión de algunas minas y del acceso a los insumos y la maquinaria. Como resultado de la presión armada y de la competencia entre actores ilegales por el acceso a las rentas del oro, como lo sugieren Idrobo et al. (2014), los homicidios en la región pasaron de 8,79 por cada 100.000 habitantes en 2004 a 91,16 en 2009 (una variación de 937%). En promedio, entre 2005 y 2009 la tasa de homicidios en el Bajo Cauca fue de 63,45 asesinatos por cada cien mil habitantes, de 39,90 en Antioquia y de 38,62 a nivel nacional.

Las autoridades estatales han enfrentado la situación con una mezcla de incapacidad, oportunidad y represión. Por un lado, aquí como en otras zonas mineras, el vacío normativo y el desconocimiento respecto a las reglas y las responsabilidades han llevado a una institucionalidad a grandes rasgos inoperante. Aunque (o porque) muchas de las autoridades elegidas tienen vínculos con la minería, existen grandes reservas con respecto al cumplimiento de las normas. Sumado a ello, el decreto 2235 de 2012 ordena a las autoridades policiales a destruir la maquinaria de las operaciones informales. La orden ha sido implementada a regañadientes, pues este tipo de acciones, que no van complementadas con esquemas de apoyo técnico a la minería ni con inversión social, son percibidas como trato injusto por parte de los mineros, quienes se sienten víctimas de la Fuerza Pública.²⁰ Por último, muchos mineros denuncian que las autoridades participan de

²⁰ Un funcionario caucano describe la situación de la siguiente manera: “El ejército se metió ahí, a tratar de sacar las retroexcavadoras (...). Más de 2.000 personas surgieron de ese río, porque eso es impresionante la cantidad de gente, más de 2.000 personas con palos, con piedras impidieron la actividad del ejército. Posteriormente se hizo una segunda arremetida para sacar los restos del río y se habían pedido prestados unas [sic] equipos de cama baja a unos ingenieros, y la gente destruyó completamente las camas bajas y no las dejaron sacar (entrevista realizada en el marco del proyecto de investigación presentado en Rettberg et al. 2013).” La resistencia a este conjunto de medidas es algo que las autoridades han enfrentado en buena parte de las regiones mineras en que han buscado ser implementadas.

la extorsión a la actividad minera. Con ello, menoscaban su de por sí reducida legitimidad y capacidad de respuesta.

Las actividades de las grandes empresas también generan controversia. Si bien son fuentes importantes de trabajo asalariado y, en comparación con la minería informal, han desarrollado prácticas de extracción más acordes con las normas de seguridad industrial y la protección del ambiente, algunos sectores de las comunidades locales las perciben como beneficiarias desproporcionadas de la extracción minera, cuestionan sus prácticas ambientales y laborales, así como los contratos de operación que han desarrollado con los mineros tradicionales (calificándolos de 'leoninos'). Sus operaciones, además, no se encuentran aisladas de las presiones ejercidas por los actores armados no estatales que hacen presencia en la región.

En suma, el Bajo Cauca es una región que concentra buena parte de la producción de oro y coca de Antioquia y del país²¹. Es también territorio estratégico para las actividades de las organizaciones criminales por las vías que ofrece tanto al mar Caribe como al Océano Pacífico y al Magdalena Medio. Por ambas razones, ha sido un territorio que ha atraído la presencia de grupos paramilitares, neo-paramilitares y guerrilleros pues ha servido bien al avance de sus propósitos; en él, además, el Estado no ha logrado consolidar su presencia ni el monopolio en el uso de la violencia legítima. La confrontación (así como los acuerdos de cooperación) entre estos grupos—síntoma de su disputa por los recursos, sus rentas y el territorio—, al igual que la confrontación entre éstos y la fuerza pública ha marcado por tanto las dinámicas del conflicto violento en la región (Giraldo, 2013; Marín Carvajal & Santos, 2016; Garzón et al., 2016).

En medio de este contexto, las autoridades mineras y ambientales, departamentales y nacionales, han buscado avanzar en la legalización y formalización de las operaciones mineras existentes como estrategia para mejorar los estándares de operación de la mayoría de unidades de producción y cerrar los canales a través de los cuales buena parte de éstas, directa e indirectamente, nutren el conflicto violento. Los operadores formales de la zona, a su vez, también reportan iniciativas orientadas a fortalecer la legalidad y formalidad de las unidades de producción de su área de influencia. Además de los operativos contra la llamada minería ilegal, se han adoptado medidas conducentes a regular la comercialización del oro y la declaración y liquidación de regalías (Massé, 2016). No obstante, la constante presencia de actores armados no estatales y organizaciones criminales, la dificultad de consolidar la presencia en el territorio de las diferentes organizaciones del Estado, y de fortalecer sus capacidades de implementación de los marcos institucionales vigentes, aunado a la relativa facilidad de explotación de los yacimientos aluviales en la región en cortos periodos de tiempo, han dificultado consolidar procesos exitosos de aislamiento de la actividad minera del conflicto violento y la criminalidad.

²¹ Entre 2010 y 2016, los municipios del Bajo Cauca aportaron, en promedio, el 60% del total de la producción de oro en el departamento. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito resalta como a partir de 2013 se ha iniciado un proceso de incremento de los cultivos de coca. En Cáceres, Tarazá y Valdivia (este último en el norte de Antioquia, cerca al Bajo Cauca y al sur de Córdoba) se concentró el 60% del total de cultivos del departamento (UNODC, 2017).

Santander

Cercano a la frontera con Venezuela, el departamento de Santander es más conocido por su producción petrolera (ver capítulo de Rettberg y Prieto sobre petróleo en este libro). Ha sido un punto nodal del conflicto armado colombiano pues varios actores armados ilegales, en especial el Ejército de Liberación Nacional (ELN), convirtieron la propiedad y el uso de los recursos naturales en el centro de sus reivindicaciones políticas.

El Complejo de Páramos Jurisdicciones Santurbán-Berlín (CPJSB) fue zona de presencia guerrillera, especialmente durante la década de los noventa y el inicio de los años 2000. El panel municipal del CEDE²² reporta presencia interrumpida de las FARC, el ELN y las autodefensas en los municipios de Suratá, California y Vetás—los municipios de Santander en el páramo con producción de oro (Suratá en menor medida). Según esta fuente, los tres tipos de organizaciones hicieron presencia en Suratá en 1993, 1997, 1999, 2000, 2002-2006 y 2010; en Vetás en 1993, 1998 y 2009 y en California en 1998, 2002 y 2004. Así, los análisis del CERAC sitúan a Suratá y Vetás como parte del grupo de municipios en los que el conflicto, entre 2002 y 2009, ha sido interrumpido y de baja intensidad. En California, por su parte, el conflicto se considera finalizado. Aunque al parecer la presencia guerrillera se concentró en Suratá, Vetás y California, este último especialmente, no estuvieron aislados de su influencia. Durante los noventa mineros tradicionales y exploradores de oro de mayor escala tuvieron que pagar extorsiones a la guerrilla durante la década de los 90 (habitantes del municipio entrevistados).

Como lo describe un funcionario de la gobernación entrevistado, el interés en la zona por parte de los grupos armados no estatales radica en ser este corredor estratégico que comunica el sur del país con el Magdalena Medio a través de la Cordillera Oriental. Esto cambió con la “Operación Berlín”, una iniciativa de las Fuerzas Armadas dirigida a la recuperación de la cordillera y las fronteras orientales en el año 2000. Varios golpes militares y el establecimiento de batallones en la zona llevaron al desplazamiento de las distintas organizaciones armadas ilegales y criminales y al desplome de indicadores como homicidios, secuestros y desplazamientos forzados de la población civil. Así, mientras en California, Suratá y Vetás la tasa de homicidios por cien mil habitantes se ubicó en promedio, respectivamente, en 187,27, 114,85, y 6,17 entre 1990 y 2003, entre 2003 y 2014 este indicador fue de 0,00, 13,65 y 4,15 respectivamente—muy por debajo de la media departamental (22,81) y nacional(37,14) en ese mismo periodo.

Desde los años noventa, cuando aún la zona era considerada “roja” y parte de un corredor estratégico de las guerrillas, una empresa canadiense (Greystar) inició exploraciones de oro en la zona. Los nombres de los municipios relevantes, Vetás y California, dan fe de que la minería (principalmente de veta) formaba parte de las actividades productivas tradicionales de la zona, incluso desde tiempos prehispánicos. Sin embargo, la llegada de la empresa extranjera aumentó la escala de las operaciones. Dada la presencia de actores armados en la zona, la empresa fue extorsionada y algunos de sus directivos secuestrados. Sin embargo, el éxito de la “Operación Berlín” permitió retomar actividades, así como la llegada de otra empresa, la brasilera AUX que posteriormente

²² <https://goo.gl/dMmKA2>

vendería su operación al fondo árabe Mubadala y hoy bajo el nombre de Minesa (Sociedad Minera de Santander S.A.S). Juntas, Eco-Oro (heredera de Greystar) y Minesa son dueñas de la mayoría de los títulos mineros en la zona.

Como en otras regiones, el alza de los precios del oro exacerbó conflictos latentes entre dueños de títulos mineros y mineros informales, grandes empresas y pequeños mineros, mineros de la zona y mineros de otras regiones atraídos por la bonanza esperada, y minería y agricultura. Los títulos que los pequeños mineros vendieron a las empresas, multiplicaron su valor en corto tiempo, llevando a que los primeros sintieran un perjuicio en el trato recibido. Además, la presión de la minería arrinconó las actividades agrícolas de la zona. El agravante en esta región, sin embargo, fue el aspecto ambiental: Ambos municipios mineros se ubican o incluyen franjas de uno de los parques naturales más vulnerables de Colombia, el páramo de Santurbán, ubicado entre 2.800 y 4.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Ante la perspectiva de ver una creciente actividad minera—y de la contaminación asociada con ella—justo en donde se produce el agua que nutre una buena parte de esa región colombiana, un movimiento cívico en Bucaramanga, a dos horas del lugar, reclamó el cese de las actividades exploratorias. El movimiento fue eficaz en llamar la atención nacional y en provocar la reacción de las autoridades ambientales, quienes declararon una moratoria sobre las actividades de exploración dentro del parque, a partir de 3,000 metros de altura, y en promover el debate sobre la relación entre minería y medio ambiente a nivel nacional. Con ello, las operaciones de una de las empresas, la Eco-Oro, quedaron en la incertidumbre mientras se definía la delimitación del páramo y del parque natural regional. Más contundente, sin embargo, ha sido la realidad financiera de las empresas en la zona: Ambas empresas entraron en crisis por razones ajenas a las condiciones en la zona (principalmente por malos manejos internos y decisiones de inversión erradas en otras ramas de su negocio). Como resultado, la producción y la exploración en la zona se encuentran interrumpidas y las expectativas sobre la riqueza minera en un estado de incertidumbre²³.

Es notoria en este caso la reducida presencia y participación de actores armados en la región, tanto en las zonas de exploración/explotación como en las zonas en las que se adelantaron las movilizaciones sociales en protección del agua. De manera ilustrativa, funcionarios de la Policía de Bucaramanga entrevistados en terreno se refirieron al hurto de teléfonos celulares como su principal preocupación en términos de seguridad, desechando otras posibilidades como homicidios o presencia de grupos armados. Atribuible al impacto que a inicios de la década del 2000 tuvo la “Operación Berlín”, este hecho muestra que la bonanza de este recurso pudo mantenerse alejada de las dinámicas del conflicto armado y de la criminalidad por lo menos por quince años. Sólo recientemente, ante el cese de actividades de las empresas, trabajadores mineros desempleados así como

²³ Al primer semestre del 2017, Eco-Oro tenía suspendidas sus actividades y se encontraba en proceso de demandar al Estado colombiano por la incertidumbre y los perjuicios que sobre sus decisiones de inversión causó el proceso de delimitación del páramo de Santurbán. Minesa, por su parte, presentó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la solicitud de licencia ambiental para dar inicio a actividades de explotación en sus títulos, ubicados por fuera de la delimitación del páramo de Santurbán pero aún dentro de su área de influencia—en la sub-cuenca del río Suratá, que nace en el área del páramo y es una de las fuentes de abastecimiento del municipio de Bucaramanga.

habitantes de otros municipios han entrado a los socavones existentes de manera ilegal para, a través del “galafardeo”, obtener el oro depositado en las vetas.

El conflicto que se presenta en este caso, entonces, es uno socio-ambiental, tramitado de manera aislada de las dinámicas del conflicto armado. Las tensiones se dan entre mineros tradicionales y mineros formales, de mediana y gran escala que por ahora sólo adelantan actividades de exploración principalmente. Igualmente, se presentan diferencias entre quienes habitan Bucaramanga, y se abastecen del agua provista por el CPJSB, y quienes habitan el páramo que viven de la minería y la agricultura y por tanto sus acciones tienen impactos sobre la cantidad y calidad del agua provista.

Nariño

Al Sur de Colombia, enmarcado por la frontera con Ecuador, por el Océano Pacífico y por el departamento de Putumayo, el departamento de Nariño se ha vuelto protagonista de la producción cocalera, el contrabando y la acción de grupos armados ilegales y bandas criminales (ODDHH, 2002 y 2009). También la minería de oro se ha desarrollado en esta región, tanto en el Pacífico (desde tiempos pre-coloniales) como en la zona Andina (con mayor intensidad durante la segunda mitad del siglo XX). Como lo resalta el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2002), Nariño es territorio estratégico al ser frontera, tener salida al mar, contar con grandes extensiones de selvas y montañas, y ofrecer salidas hacia éstas al sur del país—a través del alto y bajo Putumayo y el Macizo colombiano.

El caso nariñense muestra de forma más efectiva la convivencia y mutua relación entre recursos diversos, actores armados ilegales y bandas criminales. La guerra contra los cultivos ilícitos en el departamento vecino de Putumayo—y, en general, en el sur del país—produjo varios efectos relevantes en Nariño, principalmente el aumento de los cultivos ilícitos y, con ellos, una mayor presencia de actores armados y criminales, y una migración masiva de campesinos cocaleros buscando nuevas fuentes de ingresos. Desde 2008, el departamento tiene el mayor área sembrada de coca y desde entonces en él se encuentran entre una cuarta y una tercera parte del total de cultivos de coca del país (UNODC, 2016b). Producto de la disputa por el control de rutas, cultivos ilícitos y procesamiento de laboratorios, los actores armados no estatales, ELN, FARC y autodefensas, convirtieron al departamento en escenario de la confrontación armada en los noventa. En 2002 las FARC consolidaron su influencia en el piedemonte, el ELN en la cordillera y las autodefensas en la zona costera (ODDHH, 2002)

El control de los recursos asociados a la producción y tráfico de cocaína ha sido entonces el principal motivo para hacer presencia y luchar por el control del territorio; recursos obtenidos de otras actividades económicas, como la minería de oro, han servido de complemento de esta fuente de ingresos. Ahora bien, el aumento reciente en el precio del oro ha hecho de la actividad una fuente importante de financiación. A través de la extorsión, el secuestro extorsivo y el involucramiento en el proceso de comercialización, los actores armados estarían participando de los recursos generados a lo largo de la cadena de valor. Existe también evidencia que sugiere que, especialmente en el Pacífico, éstos se han animado a participar de manera un poco más directa en la actividad: han motivado el inicio

de nuevas operaciones o participado en la explotación de oro dentro de títulos mineros cedidos o subcontratados por un particular. En cualquier caso, la minería de oro se ha convertido en otra actividad atractiva complementaria y coexistente con otras como el narcotráfico. Así, 80% de las operaciones de aluvión identificadas en el departamento coexisten con cultivos de coca y en buena parte la disputa por estas diversas fuentes de ingresos (UNODC, 2016a), así como la confrontación directa por parte de la Fuerza Pública estarían asociadas al incremento en la tasa de homicidios²⁴.

La relación entre la minería de oro y el conflicto violento no es homogénea en todo el territorio. Existen unidades de producción que han logrado mantenerse principalmente aisladas de la injerencia de los actores armados no estatales. Así, por ejemplo, en La Llanada tanto mineros como funcionarios de la alcaldía y de la Policía Nacional reportan únicamente las unidades de producción de la parte alta, alejadas del casco urbano, bajo control de estos actores no estatales. También en este municipio, se han construido arreglos institucionales que han permitido mejorar las prácticas de extracción y beneficio del oro, como por ejemplo establecer el no uso de mercurio y promover el manejo responsable del cianuro, y regularlas bajo esquemas de certificación de minería responsable. Igualmente, la creación de la comercializadora ha permitido disminuir, al menos parcialmente, la irregularidad e informalidad que caracteriza el comercio del oro y que, en varias partes del departamento, hace que este se comercialice de manera ilegal o como contrabando en el Ecuador. Así, los mineros de la cooperativa de La Llanada, cerca al área de influencia del casco urbano, no solo cuentan con instalaciones adecuadas para el beneficio eficiente y responsable del oro, sino con canales formales de comercialización del metal que facilitan su trazabilidad (entrevistas en campo; León, 21 de marzo de 2011). Por otra parte, la relación con los actores armados al margen de la ley tiene al parecer variaciones que considerar. Así, en Los Andes se encuentra que aunque la presencia de éstos es evidente no es a través de la extorsión como se estarían relacionando principalmente: la provisión de insumos como explosivos o la disuasión de la actividad represiva de la autoridad ambiental fueron dos de las funciones reportadas en campo por los actores entrevistados que estarían desempeñando los grupos armados.

Por último, cabe mencionar que también las tensiones entre la minería a gran escala y entra esta y otras actividades económicas se hacen evidentes en el caso nariñense. Si bien para cuando los entrevistamos los mineros tradicionales del Distrito de La Llanada se mostraron abiertos a considerar y discutir formas alternativas de ejercer la actividad, incluyendo la posibilidad de que sea una operación a gran escala el actor dominante, en los municipios agrícolas del norte del departamento (Arboledas y San Lorenzo) hubo rechazo tajante a la posibilidad de tener minería a gran escala en su territorio. Ahí Mazamorra Gold no pudo continuar con su proyecto minero debido al rechazo de la comunidad para la cual este afectaría la continuidad de sus actividades tradicionales.

²⁴ El promedio de la tasa de homicidios de los municipios que integran el Distrito el Distrito Minero de La Llanada (Cumbitara, La Llanada, Los Andes, Mallama, Samaniego y Santacruz) superó entre 2004 y 2008 las medias nacional y departamental. Calculado este mismo indicador para los municipios de Barbacoas, Magüí, Roberto Payán y Tumaco, se encuentra que desde 2005 la violencia ha sido superior en el Pacífico que en el resto del departamento.

Tolima

Otro caso diferente a los anteriores se presenta en el departamento de Tolima, un departamento sin tradición minera en el cual la empresa Anglo Gold Ashanti inició exploraciones en su proyecto “La Colosa” en el municipio de Cajamarca. En el año 2006 fue el yacimiento descubierto y a la fecha de redacción del capítulo aún se entraban en fase de exploración.

El Tolima ha tenido históricamente presencia de actores armados (el “Cañón de las Hermosas”, ubicado entre el Tolima y el Valle del Cauca, ha sido refugio de las cabecillas de las FARC y, en especial, de su frente 21) y estuvo bajo influencia del comando conjunto de las FARC (ODDHH, 2005). Cobros al narcotráfico, el secuestro y la extorsión han sido las principales fuentes de financiación. Estableciendo estrictos protocolos de seguridad, así como convenios con la Fuerza Pública, la compañía reporta que ha logrado mantenerse al margen de las presiones ejercidas por los actores armados no estatales. Sin embargo, sus contratistas sí estarían siendo víctimas de la extorsión por parte de la guerrilla (e.g. FIP, 2013)

El apoyo de la comunidad circundante al proyecto ha sido escaso y las tensiones entre el sector minero y los intereses del sector arrocerero, producto histórico de las planicies tolimesas, ha sido permanente. Mientras que el sector de minería busca adelantar la exploración y, eventualmente, la explotación del proyecto “La Colosa”, el temor de los arroceros es que el beneficio del mineral contamine el agua requerida para nutrir los cultivos. La protección de actividades tradicionales no mineras, así como de la provisión de un recurso vital para el consumo humano como lo es el agua, han servido para unir una coalición capaz de hacer oposición efectiva al proyecto. Así, una consulta popular en octubre de 2013 en el municipio de Piedras (Tolima), a 100 km de la futura mina “La Colosa”, arrojó un resultado mayoritario contundente en oposición al proyecto minero. Motivados por este ejemplo, consultas similares en Ibagué y Cajamarca han buscado que los habitantes de estos municipios se expresen sobre si desean contar con un proyecto minero en sus municipios o en el área de influencia de éstos (e.g. *Verdad Abierta*, 24 de octubre de 2016). El 26 de marzo de 2017, el 97,9 por ciento de la población de Cajamarca respondieron no a la pregunta “¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”, lo que condujo a la suspensión de sus operaciones en la zona por parte de Anglo Gold Ashanti.

La presencia de grupos armados y criminales se ha manifestado a través de la extorsión a los contratistas de la empresa así como a través de intimidaciones a los actores involucrados en el conflicto socio ambiental relacionado con la ejecución del proyecto. De hecho, la presencia de estos actores ha hecho que el conflicto socio ambiental se vea permeado por las dinámicas del conflicto violento: tanto la empresa como las comunidades opositoras al proyecto han sido ya víctimas de amenazas e intimidaciones (e.g. *A la Luz Pública*, 21 de noviembre de 2014; *Verdad Abierta*, 24 de octubre de 2016).

Chocó

Ubicado en el occidente de Colombia, el departamento del Chocó se encuentra entre la cordillera occidental y el Océano Pacífico, y tiene acceso al mar Caribe a través del Golfo de Urabá en el norte del departamento. Limita con Panamá y, en Colombia, con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca. El Atrato y el San Juan son los principales ríos que bañan al departamento. El primero desemboca en el Caribe, en el golfo de Urabá, recorre buena parte del departamento en sentido sur-norte y sirve de frontera natural con Antioquia. El segundo recorre el sur del departamento, en sentido contrario, y desemboca en el Océano Pacífico, ya en el Valle del Cauca.

Sus características geográficas, e.g. relativo aislamiento, rutas hídricas, acceso al mar y frontera, así como su riqueza natural, e.g. abundancia de agua, bosques y oro, constituyen el principal atractivo de los grupos armados que buscan acceder y controlar su territorio y sus recursos. Por ejemplo, sus ríos, el San Juan y el Atrato, así como sus afluentes, principalmente, han sido empleados como corredores estratégicos para el transporte y tráfico ilegal de narcóticos y armas desde la parte interior del país hacia ambos mares (ODDHH, 2006a).

Como consecuencia de sus planes de expansión y creación de rutas para garantizar una salida al mar que conecten el Bajo Cauca con el Urabá, los grupos guerrilleros hacen presencia en el territorio desde la década de los ochenta (ODDHH, 2006a). Al mismo tiempo, los grupos paramilitares se expandieron desde entonces de la mano de narcotraficantes que adquirieron tierras e invirtieron en proyectos de importancia económica en la región (ODDHH 2006). Desde entonces ambos tipos de agrupaciones, a través de impuestos ilegales y secuestro extorsivo, captan para su financiación los ingresos y rentas generados por las actividades económicas realizadas en la región. (e.g. Vélez, 2001; Gómez Buendía, 2003; ODDHH, 2006a; Torres Gutiérrez, 2012). Al ser una de las principales, la minería de oro ha sido una de las más afectadas.

Desde la segunda mitad de la década de los noventa, la expansión de guerrillas y paramilitares coincide con un aumento en la confrontación por el control de rutas estratégicas y recursos (ODDHH, 2006a; Escobedo & Guío, 2015); en 2006 el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario reportaba como la pugna entre estos actores se localizaba para entonces en el Bajo y Medio Atrato, en el Medio San Juan, en Juradó y en el eje vial Quibdó-Medellín. Municipios como Tadó, por ejemplo, vieron como producto de esta confrontación aumentó drásticamente la tasa de homicidios entre el final de la década de los noventa e inicios del nuevo siglo (ODDHH, 2006a)—85,28 por cada cien mil habitantes cada año, en promedio, entre 1998 y 2001; muy superior a la tasa departamental y a la de Quibdó.

Ahora bien, parte del Chocó biogeográfico—punto caliente o *hotspot* de biodiversidad—, el territorio del actual departamento del Chocó fue incorporado a la explotación aurífera bajo el régimen colonial en el siglo XVII. Desde entonces, en magnitudes variables, el territorio ha sido fuente inagotable de oro. Tras la independencia al inicio del siglo XIX y la manumisión de esclavos en 1851, el sistema de extracción basado en el empleo de mano obra esclava fue sucedido por uno de pequeña escala de carácter artesanal ejercido principalmente por las comunidades negras, libres, que han habitado el

territorio. Las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX son testigos de una intensificación de la producción de oro y platino liderada por inversión extranjera y la incorporación de nuevos métodos de producción, como el uso de dragas y el establecimiento de operaciones a gran escala. A partir de los años setenta, especialmente, la extracción aurífera quedó de nuevo en manos de operaciones a pequeña escala, bien sea artesanales o de baja mecanización—caracterizadas por la gradual adopción de la motobomba. Desde los ochenta, ésta será complementada por operaciones de pequeña escala que, al gradualmente ampliar el uso de motobombas y monitores, y el empleo de retroexcavadoras y dragas de diferente tamaño y potencia²⁵, incrementan el grado de mecanización en la explotación del oro en la región²⁶. Desde entonces, el oro que se explota en el departamento proviene de operaciones a pequeña y mediana escala, informales y carentes de título minero²⁷, que se valieron tanto de métodos artesanales como mecanizados, en su mayoría, para aportar en promedio, según cifras oficiales del SIMCO, algo más de la tercera parte de la producción anual a nivel nacional entre 2010 y 2015.

Durante el presente siglo, el departamento pasó de producir, en promedio, 1,17 toneladas de oro, anualmente, entre 2001 y 2007, a producir cerca de 17 toneladas anuales entre 2008 y 2014. Motivados por el aumento del precio internacional del oro ilustrado en la figura 2, el aumento en el número de unidades de producción de oro, sin título minero en su mayoría, estaría detrás del comportamiento de estas cifras. Según reporta Codechocó, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, el número de entables en el departamento aumentaron un 145% entre 2007 y 2012. Ubicados principalmente en la cuenca del río San Juan entre 2007 y 2009, desde 2010 se ubicaron en su mayoría en el río Atrato—manteniendo desde entonces una tendencia creciente en ambos ríos (Codechocó, 2014). Si bien el promedio de máquinas por entable se ha mantenido relativamente estable (2, aproximadamente, entre excavadoras y dragas), el número total de éstas también ha aumentado: entre 2011 y 2012 la variación fue de 214%; se pasó de 159 máquinas en 86 entables a 500 máquinas en 260 entables.

Para operar, los conductores de estas unidades de producción establecen acuerdos (informales) con quienes se presentan como dueños de los terrenos en que trabajan, las alcaldías municipales, y los consejos comunitarios—propietarios oficiales de los territorios colectivos en los que operan. A éstos usualmente pagan un porcentaje de la producción o de sus ingresos que oscila entre el 5% y el 15% (e.g. Sarmiento et al., 2012.; información recolectada en campo). Aunque se reportan intentos por tratar de incluir en dichos acuerdos disposiciones en torno a las restricciones (e.g. ambientales) que debe guiar la operación, los actores en campo entrevistados dan cuenta de lo difícil que les resulta a las

²⁵ Cada vez más grandes, en forma de “dragones”, según reportes de prensa (*Semana*, 29 de marzo de 2013) y se evidencia en campo.

²⁶ Las características actuales de la actividad minera en Chocó fueron establecidas a partir del trabajo de campo realizado y los reportes (periodísticos y de entidades oficiales) consultados (e.g. Sarmiento et al. 2012 y 2013; Torres Gutiérrez et al., 2012). Los trabajos de Colmenares (1997a, 1997b y 1997c), Leal (2009), Melo (1974 y 1975), Sharp (1976), López y Arango (1977) y Abad et al. (1988), entre otros, permiten reconstruir detalladamente la historia de la actividad entre el siglo XVII y los años ochenta del siglo XX.

²⁷ Según cifras del Censo Minero Departamental realizado entre 2011 y 2012, el 99% de las unidades de producción minera censadas en Chocó (99,6% de ellas dedicadas a la producción de metálicos (oro y platino) y 0,4% a la extracción de no metálicos) no tenían título minero.

autoridades locales, departamentales y nacionales ejercer control efectivo sobre la forma como cada minero conduce sus operaciones.

También las agrupaciones armadas que hacen presencia en el territorio, guerrillas y bandas criminales o grupos neo-paramilitares, realizan cobros ilegales a las operaciones mineras según tipo y cantidad de equipos y maquinaria empleada para permitir su operación. También participan en la comercialización del metal, bien sea como intermediarios o a través del cobro de extorsiones a oficinas de compra y venta de oro ubicados en municipios como Istmina o Quibdó (e.g. Torres Gutiérrez et al., 2012; Escobedo & Guío, 2015). Tal y como lo establecen actores entrevistados en campo y reportes de prensa, la alta informalidad y poca regulación de actividades de comercialización facilita la entrada y participación de este tipo de actores. Esto mismo, además, facilita que permeen el proceso de pago, declaración y distribución de regalías: directa o indirectamente, apoyados en intermediarios, compran oro de entables no legales, o desde el exterior, y lo reportan como parte del municipio cuya alcaldía se preste para ello y acceda o bien a compartirles una parte de las regalías o a permitirles influir en su asignación o distribución. En suma, a través de extorsiones y secuestros extorsivos participan de los ingresos y rentas generadas por la minería de oro a lo largo de su cadena de valor. Su participación en ésta, por lo demás, les permite, por un lado, soportar operaciones de lavado de activos generados en actividades como el narcotráfico y por otro acceder a las regalías que financian parte del gasto público en las regiones auríferas.

A cambio de los pagos recibidos, los actores armados ofrecen protección y evitar represalias violentas contra los entables y sus conductores. Buscando proteger esta fuente de ingresos, disuaden la acción de cualquier actor que intente acabar o controlar este tipo de operaciones, bien sea la Fuerza Pública, las autoridades mineras o ambientales, o líderes comunitarios que se oponen a este modo de ejercer la actividad minera (e.g. Cuevas Guarnizo, s.f.; *Semana*, 29 de marzo de 2013).

Ahora bien, mientras en la zona rural de las partes media y alta de las cuencas de los ríos Atrato y San Juan los actores armados controlan, promueven (directa o indirectamente) o defienden entables mineros no legales, en los centros urbanos, e.g. Istmina o Quibdó, principalmente, el interés se centra en las actividades relacionadas con el comercio del oro. Y la disputa violenta por el recurso, en principio común a las zonas mineras del departamento, se estaría enfocando en los centros como Quibdó donde se concentra la comercialización del metal²⁸.

Adicional al impacto sobre los indicadores de violencia y su contribución a la financiación de las agendas de los actores armados que la saquean, los hechos recientes de

²⁸ En su estudio sobre la violencia reciente en Quibdó, Escobedo y Guío (2015) atribuyen su incremento a la disputa por los recursos asociados a la compra y venta del oro en la capital del departamento. Algunos de los hechos que soportan su argumento: el incremento en el número de entables mineros en las partes medias y altas de los ríos Atrato y San Juan, de la producción desde 2007, la relativamente baja importancia del narcotráfico en el departamento en comparación con el pacífico vallecaucano y nariñense y el hecho de que varios de los atentados registrados en la ciudad han estado dirigidos a compra ventas de oro. Como hecho adicional indicativo de lo mismo, más no concluyente, se tiene que si bien la producción de oro creció tanto en Tadó como Quibdó entre 2001 y 2015, la tasa de homicidios por cien mil habitantes en el primero decreció—de 85,28 en el periodo 1998-2001 a 41,56 en el periodo 2010-2013—y en este último pasó de 45,28 en el periodo 2006-2009 a 65,22 en el periodo 2010-2013.

la minería aurífera en el departamento estarían también contribuyendo al deterioro de la convivencia y seguridad ciudadana, así como al surgimiento de conflictos socio-ambientales. Autoridades locales entrevistadas en campo y reportes oficiales (e.g. Torres Gutiérrez, 2012) sugieren el incremento de riñas y conflictos interpersonales (inclusive dentro de la misma unidad familiar), hurtos, problemas de trabajo infantil y prostitución, irrupción del ciclo escolar y de abandono o poco cuidado de sus hijos o familiares menores por parte de padres o acudientes vinculados durante largas jornadas al trabajo en las minas. Por su parte, el trabajo realizado en los entables mineros mecanizados, en su mayoría alejados de los estándares mineros y ambientales apropiados, han deteriorado la calidad del agua para consumo humano, impactado negativamente el desarrollo de actividades económicas como la minería artesanal, la pesca y la agricultura (debido al deterioro de la calidad del suelos), generado procesos de transformación del paisaje y pérdida de la cobertura vegetal, desviación del curso de los ríos y—al generar inestabilidad de taludes, procesos erosivos, destrucción de meandros y de riberas de los ríos—hay viviendas ubicadas en las riberas de ríos como el río Quito que se han visto expuestas a deslizamientos, inundaciones y avalanchas generados por el desbordamiento de los ríos de sus cauces²⁹.

El auge de la minería mecanizada también ha comprometido la continuidad de iniciativas como Oro Verde. El programa, construido participativamente entre las autoridades ambientales, los consejos comunitarios y los mineros artesanales, logró establecer procesos de certificación de minería responsable para unidades de producción minera artesanales. El oro certificado era comercializado por el programa que se encargaba de obtener una prima sobre el precio base en los mercados internacionales. Además de garantizar la trazabilidad del oro comercializado, se establecieron canales formales y transparentes de comercialización del oro producido las unidades de producción vinculadas al programa. Los recursos obtenidos con el sobreprecio eran reinvertidos en la comunidad, así como en la planeación y uso integral de los predios de las unidades de producción (e.g. Sarmiento et al., 2013). A pesar de haberse logrado mantener al margen de la influencia de actores armados y hacer un uso y manejo responsable del oro explotado, para estas unidades de producción y para el programa en general ha sido difícil, sino imposible, competir con los entables mecanizados capaces de procesar cantidades mayores de material y obtener cantidades mayores de oro.

²⁹ En un reporte de 2012, la Contraloría General de la República describe las relaciones entre actores armados no estatales y la minería de oro en Chocó, así como los impactos de la misma sobre el ambiente y la convivencia y seguridad ciudadanas (Torres Gutiérrez et al., 2012). Los impactos de la minería mecanizada sobre la minería artesanal, otras actividades económicas, el ambiente y la salud, así como su relación con los actores armados ilegales y otros actores del territorio, son descritos en diversos reportes en los medios de comunicación (e.g. Bermúdez Liévano, 8 de junio de 2013; *El Tiempo*, 29 de noviembre de 2012; *Semana*, 29 de marzo de 2013; Cuevas Guarnizo, s.f.) así como en informes elaborados por organizaciones no gubernamentales (Melo, 2015)

Caldas

El municipio de Marmato se ubica en la zona del Alto Occidente en el departamento de Caldas al este de la Cordillera Occidental, en la cuenca del Río Cauca, en su ribera occidental. En la medida en que representa una salida al Pacífico, por el Chocó, y posibilita así la movilidad por el occidente del país, el Alto Occidente constituye una zona estratégica para los actores armados no estatales (ODDHH, 2006b).

No obstante el carácter estratégico de la zona, distintas fuentes sugieren una baja y poco continua presencia de los actores armados en el municipio de Marmato. El CERAC³⁰ encuentra en sus datos que entre 2000 y 2012 los actores armados hicieron presencia interrumpida y que fue un municipio levemente afectado por el conflicto; esto es, el promedio de eventos del conflicto armado es inferior a la media nacional. Lo anterior se evidencia igualmente en los datos del CEDE³¹, donde se reporta la nula presencia de las autodefensas, de las FARC en 1994, 2002 y 2006 y del ELN en éstos mismo dos últimos años. Asimismo, en los reportes de INDEPAZ no se incluye a Marmato como uno de los municipios más afectados por el fenómeno de bandas criminales o grupos neo-paramilitares que sucedieron a las autodefensas tras su desmovilización. En línea con lo anterior, los datos empleados por García (2015) sugieren que el municipio, durante el periodo de análisis (1997-2003; 2002-2009), estuvo bajo control de la fuerza pública—o al menos ningún actor armado consolidó su presencia ni controló la zona.

Pese a lo anterior, Marmato no ha estado aislado a las dinámicas del conflicto violento. Entre 1993 y 2013 la tasa de homicidios por cien mil habitantes fue de 80,98 en promedio, al año, muy superior a las medias departamental (74,13) y nacional (52,62). El indicador, según cálculos el antes Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, ahora alta consejería presidencial, entre 1993 y 2012, alcanza picos en 1994 (234,52), 1999 (129,13), 2001 (125,19), 2005 (153,76) y 2009 (68,76). Esta misma entidad los asocia a las disputas entre guerrillas (FARC, especialmente) y autodefensas por el control del territorio y por los potenciales recursos—producción de oro o regalías—que podría generar el inicio de una operación a mediana o gran escala³². Así pues, si bien al parecer los grupos armados no han logrado controlar Marmato y ejercer presencia e influencia de manera permanente, existe evidencia que sugiere que, al menos hasta 2005³³, lo han intentado, con repercusiones claras sobre los indicadores de violencia.

³⁰ <https://goo.gl/qAaKHp>

³¹ <https://goo.gl/dMmKA2>

³² Así, se señala que el aumento en 2001 la tasa de homicidios aumentó fruto de la llegada del frente Cacique Pipintá del bloque Central Bolívar, que entró a disputarle a la guerrilla su fuente de recursos, y coincide con la adjudicación de la licitación aurífera más grande de Caldas otorgada a la empresa Mineros de Colombia. Por su parte, el recrudecimiento de la violencia se lo asocia al tema de las regalías que éste recibe como producto de la explotación aurífera, lo cual le permite tener ingresos superiores al promedio del departamento, siendo muy atractivo, tanto para las Farc como para las autodefensas, captar este tipo de recursos a través de medios coercitivos, extorsiones y presiones. (ODDHH, 2006b, p.40)

³³ En la evidencia consultada no se sugiere que, posterior a esta fecha, haya habido un intento por captar estos recursos. Después de 2006 no se encuentra evidencia que sugiera la presencia de actores armados no estatales. Por lo demás, el incremento de la tasa de homicidios en 2009 lleva a la tasa de homicidios a un punto que, aunque elevado, se ubica por debajo del promedio del municipio en el periodo entre 1993 y 2013

Se tiene entonces que el conflicto en torno al oro en en Marmato se ha dado entre operaciones de mediana escala, formales, y de pequeña escala, en su mayoría en condiciones de informalidad. Aunque han buscado apropiarse del recurso aurífero y las rentas por éste generado, la información consultada sugiere que los actores armados han estado en la mayoría del tiempo aislados del ejercicio de la actividad—o al menos no tan involucrados como en los casos de Antioquia y Chocó, por ejemplo.

Sandoval Robayo (2012) y Lopera Mesa (2015) recuentan la historia de Marmato en la que se configura el conflicto en el municipio entre distintos modos de ejercer la minería. Parte de la provincia de Anserma, luego del Estado del Cauca y finalmente del departamento de Caldas, ya en el siglo XX, el territorio de Marmato ha sido, desde tiempos coloniales, municipio productor de oro. Durante la Colonia, la escena fue dominada por pocos productores españoles que emplearon mano de obra esclava, primero indígena y luego africana, para extraer oro de los socavones a través de operaciones a mediana y pequeña escala. Desde entonces, hasta 1925, las minas fueron trabajadas por pocos propietarios, españoles primero, ingleses después y finalmente por los hermanos Vásquez Cobo, colombianos, en asociación con capital extranjero. Éstos concentraron los derechos de explotación del recurso, el cual extrajeron a través de operaciones a mediana escala. De forma paralela empresarios locales, de manera paulatina durante este periodo de tiempo, abrieron sus propias minas—a pequeña escala, principalmente—así como molinos para el beneficio del oro.

Entre 1939 y 1954 el gobierno expidió una serie de normas encaminadas a organizar el territorio y dar solución así el conflicto que entre mineros de mediana y pequeña escala se había agudizado durante el primer cuarto del siglo. Se dispuso entonces reservar la zona alta para el ejercicio de la pequeña minería a través de un sistema de pequeños contratos o permisos de explotación suscritos y acompañados por el Ministerio de Minas y Energía, y entregar la zona baja a pocas empresas de explotación a mediana escala. El Decreto Extraordinario 2223 de 1954 dejó abierta la posibilidad para que en la parte alta se establezca una operación de gran escala, preferiblemente integrada a las explotaciones de la zona baja y conducidas así por el mismo operador.

Desde entonces, hasta la primera mitad de la década de 1980, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, fue un actor que participó directamente en la organización de la actividad en el territorio; inclusive fue propietario de molinos para la transformación y beneficio del oro (Lopera Mesa, 2015). Como también lo relatan los actores entrevistados, a través de un sistema de cotas se asignaron los sectores en que cada minero podría trabajar. Al ser ésta asignación reconocida y respaldada por la autoridad central, se dirimieron así efectivamente potenciales conflictos que entre operadores pudieran emerger. No obstante, la informalidad en la pequeña minería se mantuvo sin que sus prácticas tradicionales cambiaran sustancialmente (Lopera Mesa, 2015). Además, a pesar de que se reportan trabajos de exploración desde 1978 (SRK Consulting, 2012), ningún proyecto de mediana o gran escala se concretó—en buena parte esto explicado por el bajo nivel del precio del metal.

Según lo documenta López Mesa (2015), desde el final de la década de los ochenta se evidencian esfuerzos por consolidar un proyecto de mediana o gran escala que explote de manera integrada los recursos en Marmato. Este proceso de concentración paulatina de los

derechos de explotación en manos de unos pocos operadores revivió de nuevo las tensiones entre distintas formas de llevar a cabo la actividad minera y entre las compañías formales, de capital extranjero, y los habitantes de Marmato. Mineros Nacionales, Corona Goldfields, Compañía Minera de Caldas, Colombia Goldfields, Medoro Resources y Gran Colombia Gold integran el listado de compañías que, una tras otra, han buscado llevar a cabo un proyecto de gran escala en la zona. En la actualidad, Gran Colombia es propietaria de los derechos de exploración y explotación que en el pasado pertenecieron a Mineros Nacionales, Medoro y otros empresarios locales que decidieron vender o ceder sus títulos mineros a la Compañía Minera de Caldas, Colombia Goldfields o Medoro, en primer lugar. Es, entonces, la que más ha avanzado en el propósito de consolidar los proyectos de exploración (SRK Consulting, 2012).

El conflicto en Marmato se da, pues, en torno al modo de organizar la actividad minera en el territorio y las implicaciones que esto tendría sobre sus habitantes y los mineros tradicionales. Aunque un grupo de marmateños vendieron sus títulos o dejaron de trabajar en las minas de sus antiguos propietarios, otros, agrupados en el Comité por la Defensa Cívica de Marmato o de la Asociación de Mineros Tradicionales de Marmato (ASOMITRAMA) resisten la consolidación de un proyecto a gran escala que obligue o bien el traslado del municipio o la desaparición de la minería tradicional a pequeña escala. Cuestionan los métodos que las compañías han empleado para cerrar las operaciones o socavones dentro de las áreas concesionadas a ellas, así como la poca claridad en la información que ha sido transmitida sobre el proyecto, sin consultar con la comunidad ni hacer la socialización correspondiente (habitantes de Marmato y mineros tradicionales entrevistados; también documentado por López Mesa 2015). La información recolectada en campo permite asociar la desconfianza que ahora sienten con la empresa a las expectativas frustradas de que ésta generaría buenas oportunidades de empleo y mejores formas de llevar a cabo la actividad minera.

Por otra parte, el incremento reciente en el precio del oro ha motivado la llegada de población migrante deseosa de explotar el oro. En su mayoría lo han hecho ilegalmente, a través del “guacheo”, dentro de las áreas concesionadas a Gran Colombia Gold o dentro de las áreas reservadas para la pequeña minería, aún no en propiedad de ésta. Aunque la empresa ha firmado contratos de operación para incluir dentro de sus operaciones y bajo sus estándares mineros tradicionales, de pequeña escala, no todos han querido vincularse a esta modalidad de trabajo. Además, el no inicio de actividades de explotación hace difícil para la compañía vincular a la mano de obra flotante. Así pues, el afán por buscar alternativas de empleo y trabajo para marmateños y migrantes constituye otra arista del conflicto en el municipio. Esto, adicional a los problemas de convivencia y seguridad ciudadana relacionados con esta fiebre del oro: déficit de vivienda, prostitución, drogadicción, riesgo de deslizamientos generados por las excavaciones sin mayor control realizados en el principal cerro aurífero del municipio.

Cabe mencionar aquí, finalmente, que aunque a las operaciones informales se asocian canales también informales de comercialización del oro, buena parte del oro extraído, bien sea a través de contratos de operación o de las operaciones de la empresa, se beneficia en las instalaciones de ésta y se comercializa a través de canales informales, integrados a Gran Colombia.

Discusión

La sección anterior ilustró de qué manera, a pesar de compartir un contexto internacional y nacional similar en cuanto a la creciente demanda y altos precios del oro, y un marco regulatorio homogéneo para el país, la realidad de la relación entre oro, conflicto armado y criminalidad es diferente en varias regiones colombianas. Ello en relación tanto con la intensidad del conflicto (incluyendo la posibilidad de que dicha relación sea pacífica), con la intensidad de los conflictos sociales ocasionados por la presencia de la minería, con el rol de los actores empresariales en las zonas, y con la relación entre oro y otros recursos, principalmente la coca, vinculados a la financiación de las organizaciones armadas. La tabla 4 resume algunas de las diferencias entre las regiones estudiadas. Retoma los tipos de conexión entre minería de oro, conflicto y criminalidad propuestos anteriormente y los relaciona con las características que, según la descripción de los casos precedentes, ayudan a explicar las diferencias observadas entre las regiones auríferas estudiadas.

Los casos presentados en la sección anterior difieren del cuadro homogéneo retratado en estudios sobre la relación entre minería de oro, conflicto armado y criminalidad en Colombia. En lugar de una relación constante entre oro y conflicto, los casos presentados apuntan hacia una gran diversidad de experiencias, no todas marcadas por elevados indicadores de violencia. En tres casos —Caldas, Santander y Tolima— predomina el conflicto social sobre la presencia de actores armados y criminales. En los casos de Santander y Tolima, el asunto de fondo en torno al que gira el debate social y las preocupaciones de las comunidades no mineras es el agua, mientras que los grupos dedicados a la minería encuentran en ella una buena manera para generar ingresos y protegerse contra el desempleo. En Santander y Caldas, por su parte, en lugar de rechazar de tajo el ejercicio de la actividad minera, las comunidades de mineros tradicionales han manifestado su preocupación ante un eventual desplazamiento de su actividad debido al inicio de operaciones a gran escala. De hecho, como se puede observar en la tabla 4, en todos los casos en los que la minería constituye una actividad de vieja data, existen demandas por parte de los mineros tradicionales para encontrar alternativas concretas que propendan por la formalización efectiva de su actividad.

En un caso (Nariño) en el mismo departamento conviven la conflictividad al estilo del Bajo Cauca (en la región de la Costa Pacífico Sur) con versiones pacíficas de la extracción minera (en el Distrito minero de La Llanada), ilustrando que la tradición minera por sí sola no basta para proteger a las regiones frente a la conflictividad. Los casos del sur del Pacífico Colombiano en Nariño, del Bajo Cauca en Antioquia y del Chocó biogeográfico confirman los temores expresados por los observadores nacionales e internacionales de la relación entre un recurso lucrativo y los actores armados y criminales. Estos casos, por lo demás, comparten una serie de características comunes: abundancia de depósitos aluviales ricos en oro, alta presencia de actores armados no estatales y organizaciones criminales, baja presencia del Estado y zonas distantes, de difícil acceso, retiradas de los principales centros urbanos.

Las diferencias encontradas apuntan a la importancia de considerar aspectos relacionados con los contextos mineros, que pueden servir de factor de propulsión o de

protección frente a las perspectivas de que las regiones sean vinculadas a las dinámicas de la guerra y la criminalidad. Sumado a los factores contextuales, factores relacionados con la práctica minera resultan ilustrativos también. La tabla 4 recopila ambos tipos de factores.

Tabla 4 – Conexión entre minería de oro, conflicto y criminalidad, y posibles factores de diferenciación entre las regiones auríferas estudiadas

Fuente: elaboración propia a partir de la información primaria y secundaria recolectada para este estudio.

Casos	Antioquia (Bajo Cauca)	Chocó (Quibdó y Tadó; cuencas ríos Atrato y San Juan)	Nariño (Distrito Minero de La Llanada y de la Costa Pacífico Sur)	Tolima (Cajamarca; cuenca río Coello)	Caldas (Marmato)	Santander (California; sub-cuenca río Suratá y Páramo de Sabturbán)
Aspecto considerado						
Conexión entre minería del oro, el conflicto (violento y no violento) y la criminalidad						
Captura y disputa del oro, sus ingresos y rentas, por parte de AAML			En el Pacífico, en mayor medida	Sí, hasta antes del acuerdo con las FARC		
Conflicto social y ambiental	Formalización Convivencia y seguridad Agua y agricultura (Suroeste Antioqueño)	Formalización Agua, agricultura y pesca Convivencia y seguridad	Formalización Agua y agricultura (en el norte del departamento)	Agua y agricultura	Formalización Convivencia y seguridad	Formalización Agua Convivencia y seguridad
Características de la organización de la actividad minera						
Informalidad en la extracción del oro						
Esquemas de certificación minería responsable						Mpio. Vetas
Procesos de formalización						
Proyectos formales de mediana o gran escala	En etapa de explotación y de exploración	En etapas iniciales de exploración.	En etapas iniciales de exploración Proyecto suspendido (norte depto.)	Suspendido por consulta popular en Cajamarca	En etapa de explotación En etapa de exploración	Suspendidos (delimitación Santurbán) En exploración
Características del contexto biofísico, institucional y socio-cultural						
Tipo de yacimiento de oro predominante	Aluvión Veta (Nordeste antioqueño)	Aluvión	Veta (La Llanada) Aluvión (Pacífico sur)	Diseminado (requiere operación minera a gran escala de cielo abierto)	Veta	Veta
Tradición minera			(No, en el norte del departamento)			(No, partes media y baja de la sub-cuenca)
Presencia de actores armados no estatales u organizaciones criminales			Pacífico, principalmente			
Territorio o corredor estratégico para propósitos de actores armados no estatales u organizaciones criminales						

Con respecto al contexto pueden hacerse varias consideraciones. En primer lugar, si la región tiene *tradición minera* o no. Donde sí la hay, las perspectivas de conflicto con las comunidades son menores. Las familias y trabajadores pueden haber desarrollado patrones de migración entre actividades (incluyendo actividades ilegales como los cultivos ilícitos en el caso de Nariño), por lo cual los repuntes de la minería no se perciben como amenazas ni las caídas en el precio y en la actividad como fracasos, pues existe la otra actividad como refugio o alternativa. Donde no la hay, es más probable que los cambios repentinos en la ocupación, los ingresos y la presencia de actores generen conflictos sociales y temor al desplazamiento de otros intereses productivos. En regiones de tradición agrícola (como en el caso del Tolima, el norte de Nariño o el Suroeste Antioqueño), operaciones mineras en etapas de exploración han encontrado dificultad de consolidar sus proyectos e iniciar etapas de construcción y montaje de la mina, y explotación del yacimiento—en el norte de Nariño el proyecto no siguió adelante, en Cajamarca se encuentra suspendido y, gradualmente, los concejos municipales de los municipios del Suroeste Antioqueño han adoptado medidas restringiendo o prohibiendo en el ejercicio de la minería del oro.

En segundo lugar, los *cultivos ilícitos* parecen ser un mal vecino, en términos de atraer actores ilegales y promover prácticas afines a la criminalidad (efecto de derrame, o *spill-over*). Si bien en algunas regiones los cultivos ilícitos han operado como refugios para trabajadores desplazados de otras actividades (así como en dirección contraria, la minería ha absorbido trabajadores redundantes de los cultivos ilícitos), como lo muestran el caso de Nariño y Antioquia, la cercanía de los cultivos ilícitos a las zonas mineras facilita y quizás promueve que actores ilegales (vinculados al conflicto armado o a la criminalidad) ingresen y saqueen la actividad minera.

Ello se facilita, en tercer lugar, cuando las actividades mineras ocurren en *corredores o zonas estratégicas* para los actores armados ilegales o en zonas con presencia histórica de actores armados y criminales donde el Estado ha encontrado mayor dificultad en consolidar su presencia y asegurar el control del territorio (Bajo Cauca antioqueño, Pacífico Chocoano y Nariñense, y hasta antes del acuerdo de paz con las FARC, la zona central del Tolima). Si los actores ya hacen presencia en la zona por razones ajenas a la actividad minera, no es de extrañar que, ante un auge de la actividad y de los precios se atraiga no sólo mano de obra de otras actividades productivas sino también el interés de organizaciones armadas en busca de nuevas fuentes de financiación. La decisión de los actores ilegales de vincularse a la actividad como reguladores (gravando la actividad) o como productores (administrando y abriendo minas para su propio manejo) puede relacionarse con el nivel de control social acumulado en la zona previamente a su ingreso a la actividad. Así, en zonas más consolidadas, puede facilitarse el paso hacia el rol productivo mientras que en las demás zonas, más inciertas e inestables, los intentos de ingresos por regulación serían preferidos. Esto explicaría por qué los actores ilegales no han hecho presencia en los municipios mineros de Santander, pues la instalación de batallones militares posteriormente a la “Operación Berlín” habría tenido un efecto disuasivo sobre la llegada de grupos a la zona— a pesar ser ésta una zona aún estratégica. Explicaría también las diferencias internas de Nariño, donde la diversidad de actores armados no estatales se ha concentrado especialmente en el Pacífico nariñense.

En cuarto lugar, como ya se mencionó al inicio de esta sección, la *cercanía a centros urbanos o infraestructura* central parece operar como factor de protección frente a la incursión de actores armados, como lo ilustra el caso del proyecto “La Colosa” en Tolima, ubicado en inmediaciones del municipio de Cajamarca sobre el eje vial que comunica la capital del país con Cali, o en el caso de Santurbán y la relativa corta distancia a la zona metropolitana de Bucaramanga.

En quinto lugar está el tipo de *presencia institucional* en la región. Ya se mencionó al inicio del capítulo las dificultades enfrentadas por todos los actores estatales de las zonas mineras estudiadas por implementar efectiva y adecuadamente el marco institucional vigente. En algunas zonas, sin embargo, la presencia estatal se percibe como particularmente corrupta e injusta, percepción agudizada por la represión policial de las actividades informales, que agudizó los problemas en Antioquia. Percepción que mina la confianza en las organizaciones del Estado y cuestiona su interés por avanzar en la formalización efectiva de las operaciones mineras, a pequeña escala principalmente, en condiciones de informalidad. En otras regiones, la presencia institucional por simple cercanía geográfica o a través de la presencia de autoridades mineras o la fuerza pública puede disuadir la presencia de actores armados y evitar el surgimiento de conflicto violento, como ocurre en los casos de Caldas y Santander, donde el conflicto social y ambiental no se ha visto permeado por las dinámicas del conflicto armado.

Otros factores se relacionan con la práctica minera misma. Que la actividad sea de *veta o aluvión* importa en la medida que el segundo tipo es más intensivo en mano de obra y los yacimientos de oro depositados en aluviones son relativamente más fáciles de explotar. Ante un alza de precios como el vivido en los últimos años, más personas -usualmente sin experiencia, prueban suerte en minería de aluvión, la cual, si se compara con la minería de veta, requiere más conocimiento, capacidad de inversión y trabajos previos de adecuación. Que además las zonas ricas en este tipo de yacimientos se caractericen por la baja presencia del Estado y la alta presencia de actores armados no estatales y organizaciones criminales, facilita la entrada de nuevos operadores mineros, que en condiciones de informalidad e ilegalidad explotan este tipo de yacimientos y, la mayoría de ellos, debe compartir sus ingresos y rentas con quienes controlan el territorio.

Por su parte, las *empresas* mineras, si bien organizan la explotación y tienen las capacidades financieras para cumplir con estándares técnicos, ambientales y laborales atraen también problemas, tienden a volverse puntos de referencia de la protesta social y de las demandas gubernamentales, especialmente si se trata de empresas multinacionales. Un funcionario de una empresa que opera en California (Santander), por ejemplo, señaló de qué manera funcionarios de ese municipio utilizan hábilmente la presión de la comunidad para plantear demandas de todo tipo a la empresa (el funcionario se refirió a la “lista de mercado”). En las regiones de tradición minera, los operadores mineros tradicionales—ubicados usualmente en títulos otorgados a operadores mineros de mayor escala—demandan de éstas alternativas para formalizar su actividad o incluirlos dentro de sus operaciones. En las regiones de tradición agrícola, actores no vinculados al sector minero rechazan el posible inicio de operaciones mineras a gran escala por los impactos que éstas podrían tener sobre sus actividades. En un sentido similar, comunidades que

dependen del agua provisto por un ecosistema en el que un proyecto minero podría llevarse a cabo, rechazan su posible inicio ante los posibles impactos que éste podría acarrear.

En este orden de ideas, cabe resaltar ubicuidad del conflicto social y ambiental en los casos estudiados—como se puede apreciar en la tabla 4. Aunque las regiones en que la presencia de actores armados es mínima, sino nula, han logrado manejarlo aisladamente de las dinámicas del conflicto violento, en todas las regiones estudiadas persisten tensiones y discrepancias, bien sea respecto a si permitir o no el ejercicio de la minería aurífera (Suroeste Antioqueño, norte de Nariño, centro de Tolima y cuenca del río Suratá, en Santander) o al modo de ejercer la actividad, en términos de escala de las operaciones, y estándares y regulaciones que deberían seguirse para hacer frente y manejar sus impactos sociales y ambientales (en todos los casos incluidos en que la minería es una actividad tradicional y por tanto no se la cuestiona como alternativa de desarrollo local y regional)

Los casos regionales presentados arriba dan entonces pistas marginales acerca de cómo estos aspectos interactúan y definen la multifacética relación entre oro, conflicto y criminalidad en el nivel sub-nacional. Si bien no se puede generalizar de estos casos hacia la totalidad de municipios mineros colombianos, el análisis sugiere que factores como tradición minera, tipo de extracción y ubicación dentro de la geografía del conflicto y la criminalidad colombiana hacen algunas regiones más vulnerables que otras a la penetración por parte de los actores armados. En ese sentido, el prototipo de los casos antioqueño, chocoano y nariñense, que reúnen todos los factores que promueven el vínculo entre el conflicto violento, la criminalidad y el oro, pareciera ser más la excepción que la norma, a pesar de su peso en el imaginario colectivo nacional. Dentro de estos mismos casos, además, es posible encontrar, a nivel de unidades de producción, pistas adicionales sobre posibles factores que podrían ayudar a desvincular del conflicto y la criminalidad. Las unidades de producción visitadas en La Llanada y Tadó comparten una serie de rasgos que ayudarían a explicar su al menos parcial aislamiento del conflicto: participación en esquemas de certificación de minería responsable en los que se regulan los estándares de explotación del recurso, se brindan orientaciones técnicas y se garantizan canales formales de comercialización con baja presencia de intermediarios. Con el ánimo de avanzar en la desvinculación del oro del conflicto y la criminalidad, bien pueden aprender de estas experiencias los procesos de formalización que desde 2014 se han iniciado en la mayoría, sino todas, las regiones mineras del país.

Conclusiones

Este documento inició como una exploración de las características de la evolución reciente de la minería colombiana, en especial de su vínculo con actores ilegales y criminalidad. El cambio en el contexto institucional de simplificación de los procedimientos para permitir la actividad minera, incluyendo la liberalización de la comercialización a nivel doméstico que se dieron a finales del siglo pasado junto a un auge en los precios internacionales del oro desde comienzos del nuevo siglo crearon condiciones óptimas para atraer grandes y pequeños mineros a las zonas que geológicamente tenían potencial aurífero. Sin embargo, la institucionalidad no estuvo preparada para atender los retos ambientales, sociales y de conflictividad que traería ese crecimiento de la actividad en sus diversas formas legales, informales e ilegales. Su expresión se dio de manera muy diversa dentro del territorio

nacional, siendo el propósito de este capítulo precisamente contrastar estos procesos regionales a través de varios estudios de caso de regiones y municipios con minería de oro.

Con base en los estudios de caso fundamentados en un conjunto de entrevistas a profundidad con actores nacionales y locales relacionados con la actividad minera, y de estudio de las fuentes primarias y secundarias adicionales disponibles se contrastó el cuadro nacional con realidades regionales complejas, algunas de las cuales no se conforman con la relación directa entre oro, conflicto armado y criminalidad. Bien porque no son realidades violentas (como en el caso de la Llanada en Nariño, de Marmato en Caldas o de la sub-cuenca del río Suratá en Santander porque tienen tradición minera y porque los actores armados no estatales no ejercen ya mayor influencia) o porque el conflicto social prevalece sobre el conflicto armado y la presencia de actores criminales (como en el caso de Caldas, Santander y Tolima), contrastan con otras, como el Bajo Cauca Antioqueño o el Pacífico Chocoano y Nariñense, donde confluyen criminalidad, y conflicto armado con mayor intensidad.

El propósito en este capítulo es el de recalcar la importancia de prestar atención al nivel subnacional, en el que mostramos de qué manera, manteniendo constantes el mercado internacional del recurso así como las políticas nacionales de promoción y regulación minera, factores relacionados con contextos específicos y trayectorias institucionales históricas configuran finalmente el vínculo entre oro, conflicto y criminalidad.

Nuestros hallazgos obligan a recalcar un punto central de este libro, relacionado con la importancia de redirigir el enfoque del recurso al entorno en el que se produce, y así evitar estigmatizaciones o generalizaciones. En el fondo de los problemas referido aquí, el oro en sí juega un papel importante, pero no exclusivo ni determinante. Más importante parece ser algunos de los factores explicativos señalados aquí. Es muy probable que sea en este momento el oro, debido a los muy altos precios que ha sostenido en la última década, el que está dinamizando estos conflictos y niveles de criminalidad. Los altos precios evidentemente han atraído en todos los casos la llegada de operadores mineros de pequeña y gran escala, con mayor nivel de informalidad en los primeros. La configuración de mayores precios y mayor número de actores interesados en explotar el recurso definitivamente atraen mayores niveles de conflictividad y en ocasiones de criminalidad. Solo en los casos en que ya existía una tradición de extracción aurífera pareciera presentarse un menor nivel de conflictividad y de presencia de grupos armados que quieran capturar esas rentas, debido muy probablemente a una mayor aceptación de la actividad minera de oro. En los casos de potencial aurífero pero sin tradición minera, el conflicto, no necesariamente violento, se asocia al cuestionamiento de la actividad minera como alternativa de desarrollo y a sus posibles impactos sobre servicios ecosistémicos importantes como la provisión de agua y otras actividades tradicionales como la agricultura y la pesca.

Estas indicaciones son importantes desde el punto de vista de las recomendaciones de políticas públicas, pues debe quedar claro que la política minera, así como ha facilitado las conexiones entre conflicto y oro, puede también jugar un papel fundamental en desvincular la actividad minera de los actores ilegales si se leen los contextos locales y en cada caso se actúa acorde con ellos. En los casos evaluados en este estudio queda claro que la presencia institucional y ciertas configuraciones biofísicas o económicas asociadas al contexto local pueden generar procesos extractivos menos conflictivos o que atraigan con menor

intensidad la presencia de actores armados y de criminalidad, a pesar de las altas rentas asociadas a la actividad. La perspectiva de precios altos del oro en el contexto financiero internacional seguirá por el resto de la década como factor exógeno en estas regiones. La configuración geológica que requiera de minería de aluvión o de socavón seguirá siendo un factor exógeno pero variará de región a región. La presencia institucional, sin embargo, no tiene que ser un factor exógeno y hemos planteado aquí que puede jugar un papel importante para crear condiciones de mayor o menor conflictividad alrededor de esta actividad minera. Este es el reto de cara al inminente posconflicto colombiano: construir arreglos institucionales que, por un lado, encarrilen dentro de la legalidad y formalidad la extracción del oro en Colombia y, por otro, generan mecanismos de diálogo en favor de la acción colectiva para tramitar las tensiones sociales y ambientales en torno a la explotación de los recursos naturales y el manejo de ecosistemas estratégicos.

Referencias

- A la luz pública. (21 de noviembre de 2014). *FARC arremeten contra AngloGold en Cajamarca*. Obtenido de A la luz pública: <http://www.alaluzpublica.com/farc-arremeten-contra-anglogold-en-cajamarca/>
- Abad, J., Cossio, E., González, F., & Restrepo, R. (1982). *Una economía familiar de reproducción simple. El caso de la pequeña minería chocoana*. Medellín: CIE, Universidad de Antioquia.
- Asobancaria. (2016). *Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el subsector de extracción y comercialización de oro*. Bogotá D.C., Colombia: TC Impresiones.
- Benavides, J. (2014). La minería en Colombia: principales problemas y hoja de ruta para eliminar cuellos de botella. En J. Benavides (Ed.), *Insumos para el desarrollo del Plan Nacional de Ordenamiento Minero* (págs. xxxi-lvi). Bogotá D.C.: Ediciones Uniandes, Unidad de Planeación Minero Energética.
- Bermúdez Liévano, A. (8 de Junio de 2013). *El Cantón de San Pablo, donde los dragones arrasaron con los pequeños mineros*. Obtenido de La Silla Vacía: <http://lasillavacia.com/historia/el-canton-de-san-pablo-donde-los-dragones-arrastraron-con-los-pequenos-mineros-44979>
- Blanco Freja, J., & Sanclemente Zea, G. (2014). Instituciones, capacidades y competencias de las autoridades ambientales. En *Insumos para el Desarrollo del Plan Nacional de Ordenamiento Minero* (págs. 325-367). Bogotá D.C.: Ediciones Uniandes, Unidad de Planeación Minero Energética.
- Caracol Radio. (16 de Enero de 2015). La verdadera historia del lavado de activos a través de la minería ilegal. Obtenido de http://caracol.com.co/radio/2015/01/16/judicial/1421404800_590647.html
- Cárdenas, J., Ortiz-Riomalo, J., & Rettberg, A. (2013a). *Crafting Policies and Institutions: The Case of Mining in Colombia*. Presentado en el Séptimo Congreso Latinoamericano de

- Ciencia Política, llevado a cabo en Bogotá D.C., en la Universidad de los Andes, entre el 25 y el 27 de septiembre.
- Cárdenas, J., Ortiz-Riomalo, J., & Rettberg, A. (2013b). *Ni pesadilla ni romance. Aproximaciones regionales a la minería de oro en Colombia*. Presentado en el Seminario Internacional “Minería en Latinoamérica: retos y oportunidades”, organizado el 24 y 25 de mayo en Bogotá, Universidad de los Andes.
- Chen, D., & Perry, G. (2014). *Mining Taxation in Colombia*. Bogotá D.C.: Documento CEDE, Facultad de Economía, Universidad de los Andes.
- CINEP/Programa por la paz. (CINEP/PP 2012). *Minería, Conflictos Sociales y Violación de Derechos Humanos en Colombia*. Bogotá D.C.: CINEP/Programa por la paz.
- Codechocó. (2014). *Determinación de los valores per cápita de generación de carga contaminante de la actividad minera en el Departamento del Chocó*. Quibdó: Subdirección de calidad y control ambiental, Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó).
- Colmenares, G. (1997a). *Historia económica y social de Colombia (Volumen 1, 1537 - 1719)*. Bogotá D.C.: Tercer Mundo.
- Colmenares, G. (1997b). *Historia económica y social de Colombia (Volumen 2. Popayán: una sociedad esclavista, 1680 - 1800)*. Bogotá D.C.: Tercer Mundo.
- Colmenares, G. (1997c). *Cali: terratenientes, mineros y comerciantes, siglo XVIII*. Bogotá D.C.: Tercer Mundo.
- Cuevas Guarnizo, A. M. (s.f.). *Río Quito, vida fragmentada por la minería*. Obtenido de El Espectador: <http://www.elespectador.com/files/especiales/rioquito6/index.html>
- Dirección de Regalías - DNP. (2007). *Actualización de la cartilla "Las Regalías en Colombia"*. Bogotá D.C.: Departamento Nacional de Planeación.
- Echandía, C. (1999). Expansión territorial de las guerrillas colombianas: geografía, economía y violencia. En M. Deas, & M. Llorente (Edits.), *Reconocer la guerra para construir la paz*. Bogotá D.C.: Editorial Norma.
- Echeverry, J., & Jaime, L. (1988). La minería del oro en Antioquia y su impacto macroeconómico. *Ensayos sobre Política Económica*(14), 5-38.
- El Espectador. (17 de Agosto de 2013). La ruta de las regalías ficticias. Obtenido de <http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/ruta-de-regalias-ficticias-articulo-440663>
- El Espectador. (1 de Febrero de 2016). Cómo el oro ilegal está financiando el terrorismo. Obtenido de <http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-oro-ilegal-esta-financiando-el-terrorismo-articulo-614122>
- El Tiempo. (29 de Noviembre de 2012). Mineros artesanales temen desaparecer. Obtenido de http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/fiebredeoro/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_MULTIMEDIA-12408378.html
- El Tiempo. (16 de enero de 2015). Fiscalía dismanteló red que lavó \$ 2,6 billones con minería de oro. Obtenido de <http://www.eltiempo.com/politica/justicia/red-lavaba-dinero-con-mineria-de-oro/15107441>

- Escobar, A., & Martínez Beltrán, H. (2014). El sector minero colombiano actual. En J. Benavides (Ed.), *Insumos para el desarrollo del Plan Nacional de Ordenamiento Minero* (págs. 1-67). Bogotá D.C.: Ediciones Uniandes, Unidad de Planeación Minero Energético.
- Escobar, S. (1999). *Evolución de los movimientos guerrilleros*. Bogotá D.C.: Presidencia de la República, Consejería para la Paz - Observatorio de Violencia.
- Escobedo, R., & Guío, N. (2015). *Oro, crimen organizado y guerrillas en Quibdó*. Bogotá D.C.: Fundación Ideas para la Paz.
- FATF and APG. (2015). *Money laundering and terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold*. FATF, Paris and APG. Obtenido de <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML-TF-risks-vulnerabilities-associated-with-gold.pdf>
- Fundación Ideas para la Paz. (FIP, 2013). *Dinámicas del conflicto armado en Tolima y su impacto humanitario*. Bogotá D.C.: FIP, USAID, OIM.
- García, M. (2015). Control territorial y decisión de voto en Colombia. Un enfoque multinivel. *Política y gobierno*, XXIII(1), 57-95.
- Garzón, J. C., Llorente, M. V., Álvarez Vanegas, E., & Preciado, A. (2016). *Economías criminales en clave de postconflicto: tendencias y propuestas para enfrentarlas*. Bogotá D.C.: Fundación Ideas para la Paz.
- Garzón, J., Llorente, M., Álvarez, E., & Preciado, A. (2016). *Economías criminales en clave de postconflicto. Tendencias actuales y propuestas para hacerle frente*. Bogotá D.C.: Fundación Ideas para la Paz.
- Giraldo, J. (2013). El gobierno del oro en el Bajo Cauca. Una lectura weberiana sobre la explotación aurífera aluvial no legal. En *Economía criminal y poder político* (págs. 33-68). Medellín: EAFIT, Colciencias.
- Giraldo, J., & Muñoz, J. (2012). *Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia*. Medellín: Universidad EAFIT, Proantioquia.
- Gómez Buendía, H. (2003). *El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia - 2003*. Bogotá D.C.: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
- Ibáñez, A., & Laverde, M. (2014). Los municipios mineros en Colombia: características e impactos sobre el desarrollo. En J. Benavides (Ed.), *Insumos para el Desarrollo del Plan Nacional de Ordenamiento Minero* (págs. 203-297). Bogotá D.C.: Ediciones Uniandes, Unidad de Planeación Minero Energética.
- Idrobo, N., Mejía, D., & Tribín, A. (2014). Illegal Gold Mining and Violence in Colombia. *Peace Economics, Peace Science, and Public Policy*, 20(1), 83-111.
- Lavandaio, E. (2008). *Conozcamos más sobre minería*. Buenos Aires: Servicio Geológico Minero Argentino. Serie Publicaciones 168.
- Leal, C. (2009). La compañía Minera Chocó Pacífico y el auge del platino en Colombia, 1897 - 1930. *Historia Crítica*(Edición especial), 150-164.
- León, J. (21 de marzo de 2011). *La Llanada, la 'tercera vía' en minería*. Obtenido de La Silla Vacía: <http://lasillavacia.com/historia/la-llanada-la-tercera-en-mineria-22654>

- Lopera Mesa, G. (2015). La parte alta del cerro es para los pequeños mineros". Sobre la vigencia del régimen minero especial para Marmato y su influencia en la construcción de territorialidad. *Revista Derecho del Estado*(35).
- López, H., & Arango, M. (1977). *Pequeña y mediana minería aurífera en el bajo cauca y Nechí. Marco internacional y nacional del oro y estudio monográfico de la zona*. Medellín: CIE, Universidad de Antioquia.
- Luna Amancio, N. (17 de Agosto de 2015). *De Medellín a Estados Unidos: la ruta del oro en Colombia*. Obtenido de OjoPúblico: <http://ojo-publico.com/87/de-medellin-estados-unidos-la-ruta-del-oro-en-colombia>
- Marín Carvajal, I., & Santos, I. (2014). *Dinámicas del conflicto en el Bajo Cauca Antioqueño y su impacto humanitario*. Bogotá D.C.: Fundación Ideas para la Paz. Retrieved from <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/920>
- Martínez P., M., Peña N., J., & Velásquez C., F. (2013). *El sector extractivo en Colombia 2011 - 2012*. Bogotá D.C.: Foro Nacional por Colombia.
- Massé, F. (2016). Minería y post conflicto: ¿Es posible una minería de oro libre de conflicto en Colombia. En J. Henao, & A. González Espinosa (Edits.), *Minería y Desarrollo. Minería y Comunidades: Impactos, Conflictos y Participación Ciudadana* (págs. 257-282). Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia.
- Massé, F., & Camargo, J. (2013). Industrias extractivas y conflicto armado en Colombia. En *Los retos de la gobernanza minero-energética* (págs. 149-194). Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia.
- Massé, F., & Munevar, J. (2016b). *Due diligence in Colombia's gold supply chain*. OECD. Obtenido de <https://mneguidelines.oecd.org/Colombia-gold-supply-chain-overview.pdf>
- Melo, D. (2015). *La Minería en Chocó, en Clave de Derechos. Investigación y propuestas para convertir la crisis socio-ambiental en paz y justicia territorial*. Bogotá: Tierra Digna.
- Melo, H. (1974). *El mercado internacional del oro y la explotación del oro en Colombia*. Bogotá D.C.: Universidad Nacional, Centro de Investigaciones para el Desarrollo.
- Melo, H. (1975). *La maniobra del oro en Colombia*. Medellín: La Pulga.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (MADS, 2012). *Sinopsis nacional de la minería aurífera artesanal y de pequeña escala*. Bogotá, D.C.
- Observatorio de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. (ODDHH, 2002). *Panorama actual de Nariño*. Bogotá D.C.: Consejería DDHH. Presidencia de la República.
- Observatorio de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. (ODDHH, 2009). *Dinámica reciente de la violencia en la Costa Pacífica nariñense y caucana y su incidencia sobre las comunidades afrocolombianas*. Bogotá D.C.: Consejería DDHH. Presidencia de la República.
- Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH). (ODDHH, 2006a). *Panorama actual del Chocó*. Bogotá D.C.: Consejería Derechos Humanos. Presidencia de la República.

- Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (ODDHH, 2005). *Panorama actual del Tolima*. Bogotá D.C.: Consejería DDHH. Presidencia de la República.
- Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (ODDHH, 2006b). *Dinámica reciente de la confrontación armada en Caldas*. Bogotá D.C.: Consejería DDHH. Presidencia de la República.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (UNODC, 2016a). *Colombia. Explotación de oro de aluvión. Evidencias a partir de percepción remota*. Bogotá D.C.: UNODC.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (UNODC, 2016b). *Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2015*. Bogotá D.C.: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Gobierno de Colombia.
- Ortiz-Riomalo, J. (2016). *Explotando El Dorado en Colombia: Un estudio de la minería aurífera artesanal y a pequeña escala (MAAPE) desde el marco conceptual para el análisis y el desarrollo institucional (IAD) y la Economía de los recursos naturales*. Documento de tesis para obtener el título de Magíster en Economía: Facultad de Economía, Universidad de los Andes.
- Ortiz-Riomalo, J. F. (2016). *Explotando El Dorado en Colombia: Un estudio de la minería aurífera artesanal y a pequeña escala (MAAPE) desde el marco conceptual para el análisis y el desarrollo institucional (IAD) y la Economía de los recursos naturales*. Documento de tesis para obtener el título de Magíster en Economía: Facultad de Economía, Universidad de los Andes.
- Pantoja, F., & Pantoja, S. (2016). Problemas y Desafíos de la Minería Artesanal y en Pequeña Escala-MAPE en Colombia. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, 24(2), 147-160.
- Pérez-Rincón, M. A. (2014). Conflictos ambientales en Colombia: Inventario, caracterización y análisis. In L. Garay-Salamanca (Ed.), *Minería en Colombia: Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto* (pp. 253-326). Bogotá D.C.: Contraloría General de la República.
- Ponce Muriel, Á. (2014). Instituciones, capacidades y competencias del sector minero. En *Insumos para el desarrollo del Plan Nacional de Ordenamiento Minero* (págs. 103-131). Bogotá D.C.: Ediciones Uniandes, Unidad de Planeación Minero Energética.
- Rangel, A. (1999). Las FARC-EP una mirada actual. En Malcom Deas, & M. Llorente (Edits.), *Reconocer la Guerra para Construir la Paz*. Bogotá D.C.: Editorial Norma.
- Rettberg, A., & Ortiz-Riomalo, J. (2014a). *Conflicto Dorado: Explorando la Relación entre Minería de Oro, Conflicto Armado y Criminalidad en Colombia*. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2418883.
- Rettberg, A., & Ortiz-Riomalo, J. (2014b). *Minería de oro y conflicto en los albores del siglo XXI (2000-2012) en Colombia*. Bogotá D.C.: Manuscrito sin publicar en proceso de revisión por pares. CESED, Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes.

- Rettberg, A., & Ortiz-Riomalo, J. (2014b). *Minería de oro y conflicto en los albores del siglo XXI (2000-2012) en Colombia*. Bogotá D.C.: Manuscrito sin publicar. CESED, Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes.
- Rettberg, A., & Ortiz-Riomalo, J. F. (2016). Golden Opportunity, or a New Twist on the Resource–Conflict Relationship: Links Between the Drug Trade and Illegal Gold Mining in Colombia. *World Development*, 84, 82-96.
- Rettberg, A., Norza, E., Ortiz-Riomalo, J., Romero, M., & Torres, P. (2013). Incertidumbre, vacíos y variación. Un diagnóstico de la actividad minera de oro en diez departamentos. *Ponencia presentada en el Séptimo Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), llevado a cabo en Bogotá, Universidad de los Andes, entre el 25 y el 25 de septiembre*.
- Romero, M. (2016). Minería ilícita: incidencia en la convivencia y seguridad ciudadana en diez departamentos de Colombia. *Revista Criminalidad*, 58(1), 47-65.
- Saldarriaga-Isaza, A., Villegas-Palacio, C., & Arango, S. (2013). The public good dilemma of a non-renewable common resource: A look at the facts of artisanal gold mining. *Resources Policy*, 38, 224-232.
- Sánchez, F., & Chacón, M. (2005). *Conflicto, Estado y descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local*. Bogotá D.C.: Documentos CEDE (33), Facultad de Economía, Universidad de los Andes.
- Sandoval Robayo, M. (2012). Habitus productivo y minería: el caso de Marmato, Caldas. *Universitas humanística* (74), 145-172.
- Sarmiento, M., Ayala, H., Urán, A., Giraldo, B., Perea, J., & Mosquera, A. (2013). Legitimidad e innovación en la minería: el caso del Programa. *Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales*(14), 284-303.
- Sarmiento, M., Giraldo, B. H., Ayala, H., Uran, A., Soto, A. C., & Martinez, L. (2013). Characteristics and Challenges of Small-scale Gold Mining in Colombia. In L. Cremers, J. Kolen, & M. De Theije (Eds.), *Small-scale Gold Mining in the Amazon: The cases of Bolivia, Brazil, Colombia, Perú and Suriname* (pp. 46-67). Amsterdam: Centre for Latin American Studies and Documentation (CEDLA).
- Sarmiento, M., Soto, A., Urán, A., & Lozada, I. (23 de abril de 2012). *Pequeña minería en el Chocó*. Obtenido de Razón Pública: <http://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2908-pequena-mineria-en-el-choco.html>
- Semana. (29 de Marzo de 2013). Chocó, tierra de dragones. Obtenido de <http://www.semana.com/nacion/articulo/choco-tierra-dragones/338108-3>
- Sharp, W. (1976). *Slavery on the Spanish frontier: the Colombian Chocó, 1680-1810*. Norman, Okla: University of Oklahoma Press.
- Sieber, N., & Brain, J. (2014). Health Impact of Artisanal Gold Mining in Latin America. A Mining Boom Brings Risk from Mercury Contamination. *ReVista. Harvard Review of Latin America*, XIII(2), 66-68.
- SRK Consulting. (2012). *A NI43-101 Mineral Resource Estimate on the Marmato Project, Colombia, 21 june 2012*. Cardiff: SRK Consulting (UK) Limited.

- Torres Gutiérrez, J., Pinzón Salcedo, M., Esquivia Zapata, M., Parra Pizarro, A., & Espitia Jiménez, E. (2012). *La explotación ilícita de recursos minerales en Colombia. Casos Valle del Cauca (Río Dagua) - Chocó (Río San Juan). Efectos sociales y ambientales*. Bogotá D.C.: Contraloría General de la República (CGR).
- Unidad de Planeación Minero Energética. (UPME, 2014). *Plan Nacional de Ordenamiento Minero (PNOM). Documento en extenso. Anexo a resolución UPME 0256 de de 2014*. Bogotá D.C.: Unidad de Planeación Minero Energética, Ministerio de Minas y Energía.
- Uribe Escobar, J. (2014). El mercado del oro en Colombia. Nota editorial. *Revista del Banco de la República*, LXXXVII(1035), 5-11.
- Vélez, M. A. (2001). FARC - ELN: evolución y expansión territorial. *Desarrollo y Sociedad*(47), 151-225.
- Verdad Abierta. (24 de octubre de 2016). *Los conflictos detrás del proyecto La Colosa, en Tolima*. Obtenido de Verdad Abierta: <http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/los-resistentes/6455-los-conflictos-detras-del-proyecto-la-colosa-en-tolima>
- Zapata, J. (2014). Instituciones, capacidades y competencias de las autoridades departamentales y municipales en el ámbito de la minería. In *Insumos para el desarrollo del Plan Nacional de Ordenamiento Minero* (pp. 299-323). Bogotá D.C.: Ediciones Uniandes, Plan Nacional de Desarrollo Minero.